

Democratización



Año 5, Número 29

El Salvador 2024: la consolidación
del régimen autocrático

Ruth López

Elecciones 2024: ¿un posible punto
de inflexión?

Miguel Ángel Martínez Meucci

Un fantasma llamado Gramsci
recorre México

Alejandro G. Motta Nicolichia

El Desafío de la Argentina de Milei

Miguel Gómez Goldin

Seguridad y estabilidad: la oportunidad
de la política para salir del pantano

Andrea Balladares Letelier

Democratización

Abril 2024

Año 5, Número 29

El Salvador 2024: la consolidación
del régimen autocrático

Ruth López

Elecciones 2024: ¿un posible punto
de inflexión?

Miguel Ángel Martínez Meucci

Un fantasma llamado Gramsci
recorre México

Alejandro G. Motta Nicolichia

El Desafío de la Argentina de Milei

Miguel Gómez Goldin

Seguridad y estabilidad: la oportunidad
de la política para salir del pantano

Andrea Balladares Letelier

Caracas.

Editado por Instituto FORMA

El Salvador 2024: la consolidación del régimen autocrático

Ruth López

El quinquenio 2019-2014 en El Salvador estuvo marcado por las suspensiones y vulneraciones de derechos^{1 2}, cooptación del sistema de rendición de cuentas³, reformas a los sistemas electorales⁴, de compras públicas⁵ y persecución penal⁶; la

-
- 1 Williams Sandoval, “El IDHUCA recibió 1.814 denuncias entre los años 2020 y 2023”, *La Prensa Gráfica*, 26 de enero de 2024. Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-IDHUCA-recibio-1814-denuncias-entre-los-anos-2020-y-2023-20240125-0083.html>
 - 2 Lissette Lemus, “Régimen de excepción: tortura”, *El Diario de Hoy*, 27 de marzo de 2024. Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-tortura/1132609/2024/>
 - 3 Fundación Cristosal, noviembre de 2023, “El Estado del sistema de control en El Salvador”. Disponible en: <https://cristosal.org/ES/wp-content/uploads/2023/11/Presentacion-sistema-de-control.pdf>
 - 4 Jonatan Sisco Martínez y Ruth Eleonora López Alfaro, “Estudio jurídico de las reformas introducidas a los sistemas electorales legislativos y municipales en El Salvador”, *Idea Internacional*, 7 de julio de 2023. Disponible en: <https://www.idea.int/sites/default/files/2023-07-07-estudio-constitucional-de-las-reformas-electorales-en-el-salvador.pdf>
 - 5 Denni Portillo, “22 leyes distintas para regular las compras públicas en El Salvador”, *La Prensa Gráfica*, 9 de septiembre de 2023, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/22-leyes-distintas-para-regular-las-compras-publicas-en-El-Salvador-20230908-0095.html>
 - 6 DPLF Fundación para el debido proceso, “El Salvador: Reformas regresivas bajo el régimen de excepción representan un riesgo para la justicia penal”, 7 diciembre 2023. Disponible en: <https://www.dplf.org/>

instalación del control gubernamental de la narrativa⁷ a partir de la opacidad⁸, y la espectacularización de las decisiones presidenciales⁹. También, aumentó la pobreza extrema¹⁰, disminuyó la inversión extranjera¹¹, se obtuvo el más bajo crecimiento económico de la región¹², se contrajo el espacio cívico¹³, se redujeron los homicidios según las cifras oficiales,

org/es/news/el-salvador-reformas- regresivas- bajo- el- regimen- de- excepcion-representan-un-riesgo-para-la

- 7 Verónica Crespín, "Estudio revela que Bukele controla narrativa en las redes sociales," *Diario El Mundo*, 19 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://diario.elmundo.sv/politica/estudio-revela-que-bukele-controla-narrativa-en-las-redes-sociales>
- 8 Fundación Cristosal, enero de 2024, "Reporte sobre el Estado de la transparencia: La instauración de la opacidad". Disponible en: <https://cristosal.org/ES/reporte-sobre-el-estado-de-la-transparencia-la-instauracion-de-la-opacidad/>
- 9 Omar Luna et al., "Especial pandemia", *Revista Abierta de la Escuela Superior de Comunicaciones Mónica Herrera*, Número 14 (2020). Disponible en: <https://revistaabierta.monica Herrera.edu.sv/index.php/abierta/article/view/62>
- 10 Irma Cantizzano, "Sube la pobreza extrema en El Salvador," *La Prensa Gráfica*, 24 de noviembre de 2023. Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/economia/Sube-la-pobreza-extrema-en-El-Salvador-20231123-0093.html>
- 11 Moisés Alvarado, "Inversión en El Salvador: Nayib Bukele vs. Sánchez Cerén", *El Diario de Hoy*, 3 de enero de 2024. Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/inversion-el-salvador-nayib-bukele-sanchez-ceren/1114126/2024/>
- 12 Moisés Alvarado, "El Salvador: crecimiento económico según FMI, CEPAL, BM y BCR", *El Diario de Hoy*, 18 de diciembre de 2023. Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-salvador-crecimiento-economico-fmi-cepal-bm-bcr-/1111119/2023/>
- 13 Fundación Cristosal, noviembre de 2023, "Sociedad civil en alerta: investigación sobre afectaciones al derecho de asociación". Disponible en: <https://cristosal.org/ES/wp-content/uploads/2023/11/Sociedad-civil-en-alerta-informe.pdf>

mientras se instalaba un régimen autoritario con innumerables señalamientos de corrupción.

Por lo tanto, es necesario analizar el contexto del proceso electoral, las reformas a los sistemas electorales y las irregularidades de las jornadas eleccionarias, hacer una evaluación de los resultados electorales y exponer los desafíos de El Salvador ante la pérdida total del rumbo democrático iniciado desde los Acuerdos de Paz en 1992.

El proceso electoral 2024 en El Salvador se llevó a cabo en el contexto de un régimen de excepción instaurado por el Ejecutivo que a la fecha de las elecciones cumplía 22 meses¹⁴. Esta situación tiene efectos negativos en cuanto al respeto de los derechos y garantías necesarias para celebrar elecciones libres y, además, fue un elemento utilizado o instrumentalizado política y electoralmente por el gobierno para su beneficio. De hecho, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en su informe preliminar para la jornada electoral presidencial y legislativa del 4 de febrero 2024 afirmó que “llevar adelante procesos electorales bajo regímenes de excepción puede obstaculizar su normal organización y desarrollo”¹⁵.

14 Decreto Legislativo 933, 10 de enero de 2024, publicado en el Diario Oficial número 6, tomo 442. Disponible en: <https://www.diariooficial.gob.sv/seleccion/31182>

15 Organización de Estados Americanos, Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en El Salvador, 6 de febrero de 2024. Disponible en: <https://www.oas.org/fpdb/press/INFORME-PRELIMINAR---Informe-preliminar-de-la-Mision-de-Observacion-Electoral-de-la-OEA-en-El-Salvador.pdf>

Según una reciente investigación de la Fundación Cristosal¹⁶ se constató que en el periodo electoral hubo “un aumento en las denuncias de detenciones arbitrarias, arresto de líderes comunitarios, imposición de cuotas diarias de capturas a los cuerpos de seguridad, recaptura de personas liberadas, instauración de cercos militares y policiales en comunidades, así como la presencia militar en centros de votación e intimidación de simpatizantes y militantes de partidos de la oposición”, lo que pone en cuestión el ejercicio libre del sufragio.

Sin dudas, el reciente proceso electoral 2024 establece un antes y un después en la dinámica democrática de El Salvador a partir de una serie de condiciones y aspectos que ponen en duda la transparencia, la legalidad y la equidad de la contienda, lo que repercute negativamente en los derechos de la ciudadanía, tal es el caso de la separación de la elección general en dos jornadas eleccionarias sin una razonabilidad técnica de la decisión de la autoridad electoral y con una clara intencionalidad de arrastre de preferencias de la elección presidencial sobre la legislativa y marcando una distancia con el talón de Aquiles de la gestión del partido oficial: los gobiernos locales.

Otros aspectos relevantes que condicionaron negativamente el desarrollo del proceso son: primero, la falta de entrega de la deuda política a los partidos políticos de oposición sino hasta 3 días antes de que se celebrara la jornada eleccionaria, en

16 Fundación Cristosal, marzo de 2023, “El Salvador en elecciones. Milita-
rización y miedo”. Disponible en: <https://cristosal.org/ES/elecciones-de-2024-en-el-salvador-coercion-intimidación-y-detenciones-arbitrarias/>

franca violación del artículo 210 de la Constitución¹⁷; segundo, hubo y hay una ausencia en el control del financiamiento político, asegurando la impunidad de funcionarios que utilizaron bienes y fondos estatales para campaña¹⁸, bajo la inactividad cómplice del árbitro electoral que incumplió su deber legal de fiscalizar; tercero, inobservancia reiterada de las obligaciones de transparencia del partido de gobierno Nuevas Ideas¹⁹; y cuarto, se desplegó una campaña electoral ilegal sobre todo por parte del partido oficialista, sin ningún control, según el Consorcio Nacional Observa El Salvador²⁰, abandonando el TSE su rol de juez electoral.

Reformas que modificaron las reglas electorales

Aun cuando es necesario explicar de forma breve las reformas que afectaron las reglas de funcionamiento de los cuatro sistemas electorales salvadoreños, se debe destacar que el punto de partida fue la eliminación de la regla de garantía de la inamovilidad de las pautas del juego electoral un año antes de las elecciones, lo que provocó el desajuste del sistema para

17 Observa El Salvador 2024, *Segundo Informe de Observación Electoral*, 2 de febrero de 2024. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/12N6JtKv4XCHMB1FopBxmxkIIB_fjVNCZ/view

18 Redacción de *La Nación*, “Nayib Bukele cuestionado por uso de fondos”, 31 de enero de 2024. Disponible en: <https://www.nacion.com/el-mundo/centroamerica/nayib-bukele-cuestionado-por-uso-de-fondos/DV4LBOONVDJTO5B2L4ZCVXA6A/story/>

19 Tribunal Supremo Electoral, Resolución emitida el 25 de abril de 2023 en el proceso de referencia AIPP-03-2023. Disponible en: <https://mega.nz/file/oXAVIQCD#2jB8B9nYK15bI00JcyLtlcvbT2laTECunwYSzGWrmP4>

20 Observa El Salvador 2024, *Primer Informe de Observación Electoral*, enero de 2024. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1nnX931mWa3NgEZCtVV7L71nOPPcc_ebQ/view

producir cambios para favorecer a una fuerza política determinada y la reconfiguración del sistema de partidos políticos.

El cambio más importante en el sistema electoral presidencial fue la “habilitación” inconstitucional e ilegal de la reelección presidencial inmediata, avalada por una resolución fuera de todo marco constitucional y legal de quienes ostentan desde el 1 de mayo de 2021 inconstitucionalmente los cargos de magistrados de Sala de lo Constitucional, a partir de la destitución de los legítimamente electos en 2018, caso actualmente tramitado ante la CIDH. El modelo de reelección diferida definido en la Constitucional se pulverizó a partir de la violación de al menos 7 artículos de la Constitución que contienen reglas de prohibición de la reelección inmediata y que no permiten inclusive que sean modificadas, volviéndolas pétreas.

En el caso del sistema electoral legislativo se disminuyó de 84 a 60 el número de escaños y con ello la magnitud de las circunscripciones, también se modificó la fórmula electoral transitando de una fórmula Hare (cociente y residuos mayores) a una D’Hondt, lo que impacta también el sistema de elección del Parlamento Centroamericano. Con ello los sistemas se volvieron menos plurales y representativos, beneficiando a los partidos con mayor cantidad de votos y produciendo una sobrerrepresentación, lo que contraviene los principios de igualdad del sufragio, el de representación proporcional y el de pluralismo político. Con la fórmula anterior, Nuevas Ideas habría obtenido 10 escaños menos y habría representación de

otros institutos políticos que no lo lograron según los resultados electorales, tal es el caso de GANA y FMLN.

Debe recordarse que en las fórmulas proporcionales existen dos grandes familias: las de divisor y las de cuota. En cada una de ellas existe una fórmula que no tiene un sesgo de beneficio hacia partidos pequeños o grandes. Estas son Saint Lagüe y Hare con Restos Mayores respectivamente. De la misma manera, estas familias albergan fórmulas con sesgos marcados, siendo en las de divisor la fórmula D'Hondt la que mayor sesgo tiene hacia los partidos grandes. Por tanto, si lo que se buscaba con el cambio de fórmula era quitar los residuos (propios de las fórmulas de cuota), pero tratando de mantener la proporcionalidad, se debió pasar a Saint Lagüe y no a D'Hondt.

Adicionalmente, en el caso legislativo, se cargaron los dados a favor del partido oficialista Nuevas Ideas al aprobarse el voto en el exterior, que asignó de manera inconstitucional todos los votos de los salvadoreños con domicilio en el exterior reconocido en su Documento Único de Identidad a la circunscripción de San Salvador, generando una distorsión de la representación. Asimismo, se advierte el uso de un censo desactualizado y la privatización por el TSE del proceso electoral en el exterior, al otorgar un contrato “llave en mano” a una empresa para la gestión e implementación del voto desde el exterior, tanto en su modalidad virtual como presencial, perdiendo el control de la votación en el exterior tal como reconoció uno de sus magistrados²¹.

21 Carmen Rodríguez et al., “El audio del Comando Nacional: Nuevas Ideas controla, en nombre del TSE, centros de votación en el extranjero”, *Revista Focos*, 3 de febrero de 2024. Disponible en: <https://focostv.com/>

Finalmente, se modificaron también inconstitucionalmente las circunscripciones municipales disminuyéndolas de 262 a 44, careciendo de toda fundamentación y afectándose el carácter representativo del gobierno en la búsqueda de favorecer electoralmente al partido Nuevas Ideas. El resultado del 3 de marzo lo comprueba: de 151 alcaldías que gobernaba desde 2021, habría perdido 31, incluyendo 8 de las 14 cabeceras departamentales, de las que gobernaba 13.

Irregularidades posteriores a la jornada electoral

Las irregularidades durante las jornadas electorales no se hicieron esperar, las más graves se reportaron el 4 de febrero cuando se celebraron las elecciones más importantes para el oficialismo: presidencial y legislativa. Las más relevantes y con trascendencia en el ejercicio libre del sufragio fueron los cambios injustificados en el registro de voto residencial, incluyendo cambio de lugares de votación para los ciudadanos y hasta eliminación del padrón²²; propaganda electoral ilegal con llamado del presidente de la República a votar a favor del partido de gobierno²³, presencia de propaganda electoral del mismo partido en al menos el 55% de los centros de votación o

el-audio-del-comando-nacional-nuevas-ideas-controla-en-nombre-del-tse-centros-de-votacion-en-el-extranjero/

- 22 Abigail Parada, "Elecciones legislativas y presidenciales 2024: voto en el exterior", *El Diario de Hoy*, 4 de febrero, 2024. Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/elecciones-legislativas-presidenciales-2024-voto-en-el-exterior/1120658/2024/>
- 23 Redacción *Diario el Mundo*, "Bukele pide el voto una hora antes del cierre de las elecciones", 4 de febrero de 2024. Disponible en: <https://diario.elmundo.sv/politica/bukele-pide-el-voto-una-hora-antes-del-cierre-de-las-elecciones>

en sus cercanías²⁴ e inducción al voto en al menos el 9% de los centros de votación y en el exterior²⁵; divulgación de una encuesta “a boca de urna”; la suplantación, en al menos el 80% de las mesas de votación a través de personas designadas o propuestas únicamente por el partido Nuevas Ideas²⁶, lo que asegura el control del escrutinio y el proceso fallido de procesamiento y transmisión de resultados.

Todo acompañado de la inactividad de la autoridad electoral y la correspondiente ausencia de decisiones oportunas y eficientes del TSE ante crisis de sistema de transmisión.

A todas esas irregularidades durante la jornada se le suman otras que ocurrieron durante el proceso de escrutinio, señaladas por OEA²⁷ bajo una especial actitud y comportamientos intimidatorios que afectaron el desarrollo del proceso de escrutinio según lo manifestó el informe de *Observa EL Salvador*

24 Fundación para el Debido Proceso, “Las irregularidades en el proceso electoral salvadoreño no pueden ser ignoradas”, 8 de febrero de 2024. Disponible en: <https://www.dplf.org/es/news/las-irregularidades-en-el-proceso-electoral-salvadoreno-no-pueden-ser-ignoradas>

25 Gabriela Villarroel, #“ Denuncian inducción al voto para Nuevas Ideas en el exterior”, *La Prensa Gráfica*, 17 de enero de 2024. Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-induccion-al-voto-para-Nuevas-Ideas-en-el-exterior-20240116-0086.html>

26 Abigal Parada, “80 integrantes de JRV suplantados en elecciones”, *El Diario de Hoy*, 8 de febrero de 2024. Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/80-integrantes-jrv-suplantados-elecciones/1122146/2024/>

27 Organización de los Estados Americanos, “Comunicado de 17 de febrero de 2024”, 17 de febrero de 2024. Disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-11/24

2024.²⁸, así como agresiones a periodistas por personas identificadas del partido oficialista. La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES ha comunicado que durante el proceso electoral se registraron 319 afectaciones a la prensa, de los cuales 224 son casos de agresiones.

Los resultados

El análisis de los resultados electorales debe realizarse a partir de las jornadas y por tipo de elección.

En cuanto a la elección presidencial, como era de esperar, ante la falta de una contienda vigorosa, propuestas aglutinadoras y una campaña de miedo sobre un eventual cambio de política de seguridad, el presidente de la República fue reelegido (inconstitucionalmente) por el 82.66% del total de votos emitidos²⁹ y el 84.5% de los votos válidos, en una elección en la que votó solo el 52.60% de los electores aptos para votar que sumaban 6,214,399 teniendo en cuenta a los salvadoreños con dirección de residencia en el exterior. Mientras que el mismo partido, para la elección legislativa celebrada el mismo día, obtendría más de 501,394 votos menos que respecto de la presidencial; es decir 14.6%; sin embargo, debido al cambio de fórmula, la magnitud de las circunscripciones, el uso de un censo desactualizado y la asignación artificial de electores a la circunscripción con más escaños en disputa, el partido oficialista obtuvo el 90% de los escaños con el 70.56% de los votos válidos, por lo tanto, de no haber habido cambio en la

28 Observa El Salvador, “Comunicado de 22 de febrero de 2024”, 22 de febrero de 2024. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1jwqb-VhPIBYxwjdzW-gSAWIMKkfB5GL/view>

29 Suma de votos nulos, impugnaciones y abstenciones.

fórmula electoral, en lugar de 54 escaños de 60 habría logrado 44, perdiendo la mayoría supercalificada, necesitando de acuerdos con otros partidos políticos.

Tabla 1. Distorsión de escaños por fórmula D'Hondt

PARTIDOS	VOTOS	%	Hare	%	'Hondt	%
ARENA	227,357	7.29	5	8.33	2	3.33
FMLN	195,920	6.28	5	8.33	0	0.00
FUERZA SOLIDARIA	51,021	1.64	0	0.00	0	0.00
NUESTRO TIEMPO	41,060	1.32	0	0.00	0	0.00
NUEVAS IDEAS	2,200,332	70.56	44	73.33	54	90.00
PCN	101,641	3.26	2	3.33	2	3.33
PDC	93,108	2.99	1	1.67	1	1.67
GANA	99,344	3.19	2	3.33	0	0.00
VAMOS	91,675	2.94	1	1.67	1	1.67
CD	12,165	0.39	0	0.00	0	0.00
PDC-PCN	4,913	0.16	0	0.00	0	0.00
Total general	3,118,537	100.00	60	100.00	60	100.00

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la elección municipal y de Parlamento Centroamericano, celebrada un mes después, solo asistió a

votar el 30.10% de los electores, la más baja de la historia electoral después de los Acuerdos de Paz, por lo que el partido de gobierno vio disminuida la intención de voto en más de un millón y medio, y la disminución de la cantidad de personas que integran los Concejos Municipales plurales afecta directamente al pluralismo político como principio constitucionalmente configurado. Las comparaciones en los resultados se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 2. Comparativo de la participación y votos según elección

PARTIDOS	Presidencial		Legislativa		Parlacen		Concejos municipales	
	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%
Nuevas Ideas (N)	2,701,725	82.66	2,200,331.79	68.06	799,433.25	48.49	592,084	35.94
FMLN	204,167	6.25	195,919.98	6.06	122,926.11	7.46	125,733	7.63
ARENA	177,881	5.44	227,357.30	7.03	163,432.87	9.91	158,089	9.60
Nuestro Tiempo	65,076	1.99	41,060.48	1.27			15,202	0.92
Fuerza Solidaria	23,473	0.72	51,021.13	1.58	48,856.03	2.96	70,455	4.28
Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS)	19,293	0.59					7440	0.45
Cambio Democrático (CD)			12,165.49	0.38	30,284.00	1.84	52,356	3.18
Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)			99,343.89	3.07	116,549.25	7.07	216,664	13.15
Partido de Concertación Nacional (PCN)			101,641.43	3.14	91,474.17	5.55	120,267	7.30
Partido Demócrata Cristiano			93,107.56	2.88	114,370.32	6.94	180,377	10.95

(PDC)								
Coalición PDC-PCN		4,912.50	0.15			22,446	1.36	
VAMOS		91,675.45	2.84			8994	0.55	
Coalición N-CD						24,169	1.47	
Coalición N -GANA						15,992	0.97	
Coalición PCN-GANA						5948	0.36	
Nulos	60,027	1.84	69,909.00	2.16	84,115.00	5.10	26,644	1.62
Abstenciones	15,064	0.46	40,208.00	1.24	74,345.00	4.51	3865	0.23
Impugnados	1,760	0.05	4,180.00	0.13	2,709.00	0.16	634	0.04
Votaron	3,268,466	100.00	3,232,834	100.00	1,648,495	100.00	1,647,359	100
Aptos para votar	6,214,399		6,214,399		5,473,305		5,473,305	
Participación	52.60%		52.02		30.12		30.1	
Representatividad del ganador		43.48						

Fuente: elaboración propia a partir de datos emitidos por el TSE.

Los resultados electorales dejaron como consecuencia la reducción de partidos políticos (2) y un evidente sistema de partido hegemónico, que no requiere de ninguna fuerza política formalizada para la adopción y ejecución de sus decisiones, eliminando por completo la posibilidad de contar con un sistema de frenos y contrapesos funcional y que, ni en el corto, ni mediano plazo se advierta una posibilidad de cambio.

Vale la pena reseñar el comportamiento electoral de los salvadoreños que votaron desde el exterior en la elección presidencial, bajo las dos modalidades posibles: virtual o presencial en centros de votación establecidos en el exterior.

No hubo un padrón de electores para quienes teniendo documento de identidad con domicilio en El Salvador votarían en el exterior. Esto se debió a una decisión de los legisladores de impedir al TSE la construcción de un padrón especial, lo que complejizó las decisiones del TSE en la planificación del proceso en cuanto a las capacidades logísticas necesarias para su operatividad, dígase espacio de centros de votación, cantidad de máquinas de votación, entre otros. En esta modalidad votaron para las elecciones presidenciales y legislativas 88,455 electores de 5,473,305 posibles y el partido de gobierno obtuvo el 96.74% de los votos válidos, mientras que en el voto remoto por internet alcanzó el 98.41%. A la fecha las auditorías al sistema realizadas por una empresa extranjera han sido clasificadas por el TSE como información reservada³⁰.

¿A dónde vamos?

Al analizar los resultados electorales se puede ver una disminución significativa en la participación de la ciudadanía, la contracción del sistema de partidos y la instalación de un sistema de partido hegemónico, lo que no beneficia al electorado minoritario y contribuye deliberadamente a una tiranía de las mayorías.

El Salvador vive una autocratización del sistema político, donde el sistema de partidos, el sistema electoral, la forma de gobierno, el sistema de control y el sistema de la función

30 Verónica Crespín, "TSE reserva informes de auditoría de voto del exterior y correspondencia de Indra sobre voto electrónico", *Diario El Mundo*, 6 de marzo de 2024. Disponible en: <https://diario.elmundo.sv/politica/tse-reserva-informes-de-auditoria-de-voto-del-exterior-y-correspondencia-de-indra-sobre-voto-electronico>

pública son totalmente controlados por la voluntad del autócrata. Este es un camino sin retorno en el corto o mediano plazo para los salvadoreños, toda vez que las reformas de las reglas electorales aseguran que la vía electoral no cumpla con su función de cambio o renovación de autoridades sino de legitimación del poder.

Este año corresponde a la nueva integración de la Asamblea Legislativa elegir a 5 magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia y a 5 magistrados propietarios y a sus 5 suplentes de la próxima autoridad electoral, la que deberá organizar e impartir justicia electoral en las próximas elecciones de 2027 (legislativas y municipales) y 2029 (presidenciales y de Parlamento Centroamericano). En ninguno de los casos se advierte que exista la posibilidad del nombramiento de funcionarios independientes, lo que confirmaría, una vez más la cooptación institucional en el país. El control de las decisiones del Ejecutivo y de su brazo legislativo no puede verse cuestionado.

En esa misma línea el Régimen de Excepción persistirá en tanto el gobierno lo requiera como validación de su popularidad, sin tener en cuenta las más de 236 muertes de personas fallecidas bajo custodia del Estado sin un proceso, o las más de 76,000 personas detenidas sin determinación de su responsabilidad o no en posibles delitos.

Por otro lado, el control de la narrativa gubernamental al amparo de las restricciones y cierre del acceso a la información pública, vulnerando los derechos de la ciudadanía, es el seguro imprescindible para mantener bajo la mesa fuertes casos de

corrupción que incluyen el financiamiento irregular de las campañas electorales³¹.

Finalmente, no es lejana una reforma constitucional para ofrecer al país un “Nuevo Estado” con “nuevos derechos” como parte de una narrativa refundacional y mesiánica.

Este escenario no es muy diferente de otras autocracias de nuestra América Latina y los pasos subsiguientes, también ya los conocemos.

31 Jessica García, “Observadores electorales piden investigar delitos electorales en elecciones de 2024”, El Diario de Hoy, 1 de marzo de 2024. Disponible en: [https:// www.elsalvador.com/noticias/nacional/observadores-electorales-elecciones-2024-delitos/1126514/2024/](https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/observadores-electorales-elecciones-2024-delitos/1126514/2024/)

Elecciones 2024: ¿un posible punto de inflexión?

Miguel Ángel Martínez Meucci

El régimen chavista-madurista, instaurado por la llamada Revolución Bolivariana, ha cumplido ya un cuarto de siglo en el poder. El saldo está a la vista de todos y difícilmente podría ser más catastrófico: instituciones destruidas, economía arruinada, familias separadas. De estas terribles consecuencias no se libran los demás países del hemisferio, receptores de casi 8 millones de migrantes venezolanos y objeto de injerencia indebida por parte del régimen que preside Nicolás Maduro.

Sin embargo, Venezuela no es el único país que ha pasado por un colapso semejante, y tampoco es la primera vez que lo experimenta. A lo largo de la historia, casi todas las sociedades han sufrido procesos críticos que tarde o temprano alcanzan un punto de inflexión, lo cual, en los mejores casos, se relaciona con algún tipo de aprendizaje político que permite establecer las bases de un largo período de desarrollo.

En función de lo anterior, son muchas las preguntas que surgen con respecto al caso venezolano, especialmente cuando las elecciones presidenciales del 2024 emergen como oportunidad para el cambio político. ¿Podría esta coyuntura electoral convertirse en un punto de inflexión en medio de la actual deriva nacional? ¿Hemos desarrollado como sociedad

algún tipo de aprendizaje político que nos permita aprovechar esta coyuntura? ¿Hay elementos para pensar que estamos ante un eventual cambio político? ¿Cuál es la importancia que revisten para nuestro hemisferio las próximas elecciones presidenciales en Venezuela?

En las próximas páginas procederemos a ensayar algunas respuestas a tales interrogantes, en el orden inverso al enunciado en el párrafo anterior. El presente artículo no le ofrece al lector un análisis de escenarios; no es un ejercicio de prospectiva política, ni mucho menos procura responder, a través de una aproximación metodológicamente rigurosa, una pregunta de investigación de carácter formal. Solo una cosa se pretende con este artículo: explorar las razones (eventualmente activas a día de hoy) de lo que podría pasar a corto y mediano plazo si, contra todo pronóstico, las cosas llegaran a salir relativamente bien en este 2024, o un poco más adelante.

a. Relevancia internacional del caso venezolano: un proceso nacional con repercusiones externas

Una cuidadosa mirada retrospectiva permite constatar hasta qué punto la llamada Revolución Bolivariana ha ejercido una notable influencia en América Latina. Así lo demuestran algunos de los cambios más relevantes acaecidos en la región durante el último cuarto de siglo, especialmente en el plano de las instituciones multilaterales. En dicho plano se constata hasta qué punto la Venezuela chavista-madurista ha contribuido directamente a propiciar dichos cambios.

Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de la república en 1999, los principales esquemas de cooperación e

integración regional eran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC-NAFTA), mecanismos que se fortalecieron o surgieron al calor de la ola liberal de los años 90 del siglo pasado. Adicionalmente, el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) venía perfilándose como una iniciativa de cooperación comercial que en teoría estaba destinada a abarcar todo el hemisferio. A tales esquemas cabía sumar la Organización de Estados Americanos (OEA), que desde 1948 ha sido el principal foro político de la región por iniciativa principal de los Estados Unidos.

25 años después, el panorama ha cambiado sustancialmente. MERCOSUR ha perdido mucho del peso específico que logró ejercer en Sudamérica, mientras la CAN ha quedado reducida a su mínima expresión. El TLC, por su parte, ha sido revisado por la administración Trump hasta reconvertirse en el T-MEC, mientras que la OEA parece jugar un papel bastante atenuado con respecto al pasado. Como esquemas a menudo contrapuestos han emergido nuevos foros políticos regionales, tales como Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) o la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), y aunque estos esquemas no necesariamente gozan de buena salud, sí han contribuido a restar poder e influencia a los anteriores.

En todos estos casos, la Venezuela de Chávez y Maduro ha jugado un activo papel en la modificación del sistema de organismos multilaterales que preponderaban en la región. Chávez se movió enérgicamente para hundir el ALCA en 2005

y sacar a Venezuela de la CAN en 2006, mientras se apresuraba a fundar el ALBA en 2004 y la CELAC (junto a Cuba y Bolivia como los tres estados promotores) en 2010-2011. De igual modo, Chávez apoyó al gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva en la creación de UNASUR en 2008. Maduro, por su parte, anunció el retiro de Venezuela de la OEA en 2017. En pocas palabras, la Revolución Bolivariana ha sido determinante para que el sistema de mecanismos de cooperación regional haya experimentado cambios muy significativos.

La Venezuela de Chávez y Maduro también ha ayudado de modo entusiasta a que países como China, pero sobre todo Rusia e Irán, incrementen sus niveles de operación en América Latina. Cerca de una decena de países iberoamericanos compran armamento a Moscú, pero en el caso de Venezuela está claro que Rusia se ha convertido en su principal surtidor de armamento. Y en cuanto a las redes del chiísmo en Sudamérica, las evidencias de la cooperación que Irán le brinda al actual gobierno venezolano parecen ir en aumento.

La Revolución Bolivariana también ha influido notablemente en el deterioro de la democracia en el continente. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, en todo el hemisferio sólo se mantenía en el poder un régimen autoritario: el castrista en Cuba. A día de hoy, dicho régimen no sólo se ha fortalecido con apoyo del chavismo-madurismo, sino que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua también ha contado con una ayuda similar para apuntarse como una dictadura; en Bolivia impera un autoritarismo que gana elecciones y Venezuela misma presenta hoy un régimen autocrático.

Otros países gobernados por socios de la Revolución Bolivariana, tales como Honduras y Ecuador, también registran retrocesos importantes en la calidad de sus democracias, mientras cunden las sospechas de que estallidos sociales como los registrados en Chile en 2019 o en Colombia en 2021 hayan sido instigados o potenciados por el régimen de Nicolás Maduro. Incluso los procesos constituyentes que se han saldado con resultados variables en varios países de la región (Bolivia, Ecuador, Chile) parecen encontrar en el caso venezolano una pauta a seguir y un respaldo diplomático indudable.

Sin embargo, la consecuencia más notoria que la Revolución Bolivariana parece estar ejerciendo en la región es la cantidad de migrantes venezolanos que se desplazan por toda América Latina, Norteamérica y Europa. Los países sudamericanos reciben a más de seis de los casi ocho millones de venezolanos que viven hoy fuera del país, circunstancia que ha alterado las dinámicas sociales y políticas de sus sociedades de forma más que relevante. En varios casos, la penetración de organizaciones criminales venezolanas (con el Tren de Aragua a la cabeza) levanta animadversiones que, por desgracia, terminan penalizando a toda la población migrante en general.

Por si esto fuera poco, la influencia chavista-madurista en la región no cesa de hacerse cada vez más compleja. El reciente asesinato en Santiago de Chile del teniente venezolano Ronald Ojeda, asilado en dicho país tras haber pasado por las mazmorras venezolanas, no hace sino aumentar las dudas y sospechas en torno al tipo de operaciones que vienen desarrollando en toda la región, tanto las organizaciones venezolanas

del crimen organizado como el propio régimen vigente en Venezuela.

Es importante señalar que todo lo anterior emerge como consecuencia del carácter *revolucionario* del régimen chavista-madurista. Un estado revolucionario es aquel que pretende subvertir las normas ya consolidadas que regulan el comportamiento de los actores del sistema internacional. Por lo general, los estados revolucionarios no sólo manifiestan una y otra vez su disconformidad radical con el orden internacional vigente, sino que además procuran “exportar la revolución” que vienen desarrollando en su propio país, recurriendo para ello a mecanismos convencionales y no convencionales.

En virtud de todo lo anterior, unas elecciones en Venezuela serán importantes para el hemisferio en la medida en que verdaderamente sean capaces de propiciar un cambio. Y así como muchas dictaduras comunistas se desplomaron con la Unión Soviética, devenida en pilar insustituible para todas ellas, un eventual colapso del régimen chavista-madurista probablemente tendría una influencia importante en toda la región, especialmente en aquellos países que como Cuba y Nicaragua están gobernados por dictaduras muy afines a la venezolana. Asimismo, recientes encuestas indican las dos tendencias migratorias contrapuestas que podrían derivarse de esta coyuntura: el eventual retorno de muchos emigrados en caso de producirse un cambio en Venezuela, o el aumento de la emigración si el régimen se consolida.

b. El liderazgo de María Corina Machado y el desequilibrio del sistema de partidos

Ahora bien, ¿cuáles son las oportunidades reales de que las elecciones de 2024 produzcan un cambio político significativo en Venezuela? Por un lado, las probabilidades parecen jugar claramente en contra, sobre todo si juzgamos a la luz de las “inercias antidemocráticas” que durante 25 años de chavismo-madurismo se han venido implantando en el país. Por otro lado, actualmente parecen estar emergiendo factores inéditos, dinámicas disruptivas que eventualmente podrían llegar a descarrilar tales inercias. Examinemos ambas tendencias y el modo en que se contraponen.

En primer lugar, ¿a qué nos referimos con “inercias antidemocráticas”? De entrada, cabe destacar que el chavismo siempre tuvo claro que su intención era quebrar la democracia liberal para perpetuarse en el poder. Desde un primer momento aprovechó su popularidad inicial para desmontar las bases del sistema democrático. Para ello insistió en la necesidad de cambiar todas las reglas fundamentales de la República Civil, comenzando por la Constitución, siguiendo luego con la automatización de las elecciones y la promulgación de leyes habilitantes, para finalizar con la represión y el control de PDVSA, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.

Ante la inoperancia de las instituciones políticas para detener esta arremetida en sus primeros años, amplios sectores de la sociedad venezolana iniciaron una resistencia tan tenaz como desordenada e infructuosa. Paros sectoriales y generales;

marchas y concentraciones; elecciones y protestas; diversos esquemas unitarios; varios referendos; un efímero derrocamiento del presidente Chávez, y hasta un gobierno interino, han sido los principales mecanismos empleados para procurar un cambio político que, sin embargo, nunca terminó de producirse en la práctica.

Tal como ha señalado recientemente Steven Levitsky, la Venezuela de nuestro tiempo “desafía las leyes de la gravedad de la política”. A pesar de los denodados esfuerzos de los opositores, un gobierno impopular y autoritario como el de Maduro ha logrado perpetuarse en el poder durante más de una década. Este resultado se debe en parte al tipo de régimen político que Chávez le legó, expresamente preparado para controlar a la población a través de mecanismos de inteligencia y represión de raigambre castrista. Igualmente, la habilidad negociadora que el propio Maduro se ha visto obligado a desarrollar ha sido un factor decisivo para su continuidad en el poder.

Maduro no cuenta con el carisma de Chávez, si bien esto no constituye su principal hándicap. Más graves resultan dos factores que lo distinguen de su predecesor: no proviene de las fuerzas armadas, y tampoco ha contado con un alza similar en los precios del petróleo. El primer factor lo ha hecho notablemente dependiente de una figura como Vladimir Padrino López para controlar al estamento castrense, a diferencia de un Chávez que cambiaba con frecuencia a sus ministros de Defensa y altos mandos militares. Sin embargo, es probable que Maduro haya desarrollado una mayor independencia que su predecesor con respecto al rol ejercido por Cuba.

En cuanto al segundo factor, Maduro heredó una economía profundamente endeudada y dependiente de las importaciones y del alza continua en los precios del petróleo. Chávez se empeñó en doblegar y expropiar al sector privado mientras politizaba y destruía a PDVSA. Gracias al auge de los precios del crudo, y mediante la expansión del gasto público, favoreció un consumo interno que luego satisfizo con importaciones desde países con gobiernos aliados. Potenció un gigantesco aparato clientelar a través de las llamadas “misiones”, mientras que con abundantes subsidios y excesivos controles cambiarios se distorsionaba por completo el valor de la moneda y la relación trabajo-beneficio, hasta que el sistema colapsó al inicio de la presidencia de Maduro.

La consiguiente hiperinflación fue el principal detonante de largos ciclos de protesta en 2014 y 2017, fuertemente reprimidos por efectivos estatales y paraestatales. La administración Obama inició en esos años la aplicación de sanciones personales a altos funcionarios del régimen venezolano. En ese contexto tuvieron lugar la instalación de una asamblea constituyente (que al cabo de tres años no produjo ninguna constitución) y las elecciones fraudulentas de 2018, que a su vez llevaron a la oposición a tomar la decisión de conformar el gobierno interino de 2019. Para sortear estas difíciles tesituras, Maduro se acostumbró a manejarse con soltura a lo largo de diversos diálogos facilitados por actores foráneos, a lo largo de los cuales ganó tiempo sin ceder demasiado a cambio.

Por si lo anterior no fuera suficiente para generar un desánimo casi crónico en la población, a todos estos factores hay que sumar la enorme emigración que repuntó a partir de

2017 y la desmovilización política que propició la pandemia del covid-19. Terminó así de configurarse en el país una inercia de apatía y desesperanza generalizada. Los desesperanzados fueron proliferando en la misma medida en que se multiplicaron quienes predicaban la necesidad de adaptarse, aunque dicha adaptación resulte muy difícil de aceptar para esa enorme mayoría de venezolanos que vive en condiciones cada vez más desesperadas.

Pero por otra parte, y quizás justamente por la cantidad de atropellos e injusticias de las que ha sido objeto la sociedad venezolana, *la coyuntura electoral del 2024 podría estarse configurando como una oportunidad inédita para un cambio profundo en Venezuela*. Un cambio que podría no limitarse a las personas que ejercen el gobierno, o detenerse en un cambio de régimen político, sino extenderse hasta el sentido profundo de las relaciones Estado-Sociedad que durante mucho tiempo ha predominado en nuestro país. A fin de cuentas, la naturaleza no da saltos. Sólo cuando la mayor parte de los elementos que sostienen un sistema ha colapsado es cuando comienzan a afianzarse las condiciones y principios para el surgimiento de lo sustancialmente nuevo.

Señalaremos aquí algunos de los factores y dinámicas disruptivas que parecen estar en curso en estos momentos. Un primer factor que cabe destacar aquí es *la crisis del sistema de partidos que se ha venido consolidando durante las últimas tres décadas*, surgido a su vez de la crisis del sistema bipartidista que durante los treinta años anteriores protagonizaron Acción Democrática (AD) y COPEI. La debacle de estos dos grandes partidos en 1993 dio origen en un primer momento, durante los

años 90, a un sistema relativamente atomizado, conformado por una pluralidad de liderazgos y organizaciones políticas provenientes del desmembramiento de AD y COPEI. A menudo esas nuevas figuras emergieron durante –y como consecuencia de– el proceso de descentralización que impulsó la Comisión de Reforma para el Estado (COPRE).

En medio de esa atomización, Hugo Chávez irrumpió como un *outsider* militarista y populista, congregando en torno a sí a múltiples actores políticos cuyo único común denominador era su deslealtad al sistema político anterior, al que dieron en llamar “puntofijismo”. A partir de 2006, Chávez impulsó la concentración de dichas fuerzas en una nueva organización, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), convertido luego en partido hegemónico ante una pluralidad de organizaciones opositoras que, por lo general, compartían una común orientación socialdemócrata. En reiteradas ocasiones esa variopinta oposición ha realizado esfuerzos para funcionar mancomunadamente, tal como lo demuestra una sucesión de esquemas unitarios en la que destacan la Coordinadora Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática y la Plataforma Unitaria.

Paradójicamente, la conflictiva interacción que durante más de dos décadas se ha desarrollado entre el chavismo y la oposición ha ido desembocando en un pluralismo polarizado cada vez más estable. Por un lado, el carácter autocrático del chavismo ha impuesto una disciplina férrea al interior del PSUV, donde los dirigentes principales imponen a dedo a sus candidatos para cada elección que se presente. Por otro lado, el mecanismo unitario ha terminado operando como un cartel, en

donde la oferta política se restringe ante el ciudadano mientras queda supeditada a las negociaciones interpartidistas que se desarrollan en el seno de las coaliciones opositoras.

Dicho sistema evolucionó de modo tal que mientras el chavismo se reserva a cualquier precio la presidencia de la república (garantía de continuidad del régimen), las elecciones en los niveles sub-nacionales permiten un reparto de cargos entre ambos polos y generan los incentivos para una relativa estabilización del sistema en su conjunto. Sin embargo, los nefastos resultados cosechados en el plano de las políticas públicas, consecuencia principalmente del ejercicio autocrático y depredador que el chavismo hace del poder estatal, pero también de la percepción generalizada de que la oposición se ha hecho incapaz de modificar dicha situación, han hecho que la confianza de los ciudadanos en este sistema decaiga hasta alcanzar mínimos históricos.

Esto nos lleva al segundo factor a destacar aquí: el surgimiento de un liderazgo individual, alternativo y no convencional para este sistema, como el que encarna María Corina Machado. Con una propuesta bien diferenciada, una visión esencialmente liberal en el plano doctrinal y una actitud contraria a la estabilización del statu quo, la oferta política de Machado finalmente ha conectado con el país, en el momento en el que una clarísima mayoría de los ciudadanos rechaza el socialismo y apuesta por quien de modo inequívoco trabaje a favor de un sistema radicalmente distinto.

El contraste que conlleva su liderazgo se incrementa, además, por tratarse de una mujer y una madre. Esta circuns-

tancia no es menor en un sistema político como el venezolano, plagado de obstáculos a la hora de abrirle camino a los liderazgos femeninos, pero que al mismo tiempo se desenvuelve en el seno de una sociedad matricentrada. De hecho, es difícil concebir un liderazgo más opuesto, una imagen más contrastante, frente a la que ofrece un régimen militarista y autocrático. Las dimensiones de este fenómeno quedaron patentes en las primarias del 22 de octubre de 2023, donde el 93% de los casi tres millones de votantes se inclinaron masivamente en favor de la candidatura de Machado, incluso a sabiendas de que el régimen que preside Nicolás Maduro había decidido impedirle competir en las elecciones presidenciales de 2024.

Más allá del tiempo que pueda mantenerse vigente este fenómeno, lo importante es que refleja el rechazo de los venezolanos a un sistema de partidos que actualmente se encuentra muy alejado de sus expectativas. En parte, el descrédito del sistema en su conjunto se debe al continuo hostigamiento de la oposición por parte del régimen chavista-madurista, que desmantela a las organizaciones más frontales mientras avanza domesticando a unos y cooptando a otros. Como consecuencia de lo anterior parece reducirse la probabilidad de que un cambio profundo en el sistema sea conducido por los sectores políticos más visibles durante estos últimos 25 años. La mesa parece estar servida para que la ciudadanía le apueste masivamente a algo distinto.

En este contexto, la irrupción de un liderazgo fuerte, claramente asociado a una persona y a un discurso rompedor, ofrece nuevas perspectivas de cara a un eventual cambio en el

contexto de unas elecciones presidenciales. La inhabilitación de Machado no ha impedido que la intención de voto se posicione a su favor en cifras que rondan la proporción 80-20; de hecho, más bien la ha potenciado. Es una señal muy clara de que el modelo chavista-madurista está agotado, aunque todavía se sostenga por la fuerza, y de que la posibilidad de un cambio dependerá de la capacidad del liderazgo opositor para articular ese gigantesco rechazo popular al régimen autocrático.

Para el momento de escribir este artículo, ni la candidatura de Machado ni la de su representante, la Dra. Corina Yoris, han podido materializarse durante las jornadas de postulación ante el Congreso Nacional Electoral. Lo impidió el propio régimen autocrático, quien en cambio sí le dio la opción a una serie de candidatos con los que ha demostrado entenderse con mayor o menor facilidad. No es posible augurar lo que pasará a partir de ahora, pero sí cabe señalar que tanto el enorme rechazo que experimenta el régimen actual, como la presencia de un liderazgo nítido y frontal que ha arraigado profundamente entre los venezolanos, constituyen obstáculos claros de cara a la consumación de un fraude. Muchas dictaduras han caído tras intentar este tipo de maniobras.

c. El final del siglo petrolero y el necesario redescubrimiento del valor de la libertad

Cabe entonces preguntarse si la posibilidad de cambio que pudiera estar emergiendo en esta coyuntura electoral de 2024 se debe a factores fortuitos o pasajeros, o si más bien sobreviene como consecuencia de un aprendizaje generalizado en el seno de la sociedad venezolana. En verdad aún es pronto para

afirmar algo con rotundidad, dado que los acontecimientos se encuentran en pleno desarrollo. No obstante, a estas alturas ya es posible apuntar varios hechos reveladores, los cuales consideramos necesario presentar en perspectiva histórica, si queremos tener clara conciencia del cambio ante cuyo advenimiento pudiéramos encontrarnos ahora mismo.

Nuestra sociedad ha sido profundamente moldeada por lo que pudiéramos denominar “el siglo petrolero venezolano”. Para comprender esto es necesario reparar en el hecho de que la unidad del actual territorio venezolano no es, ni remotamente, una tendencia natural desde un punto de vista geográfico, social, cultural o político. Durante los siglos XVI y XVII, el occidente de la actual Venezuela estuvo más relacionado con lo que hoy en día es Colombia que con el resto del territorio, que durante largo tiempo estuvo mucho más vinculado con las islas del Caribe.

La unidad territorial de Venezuela es concebida tardíamente, en la segunda mitad del siglo XVIII, con la fundación de la Capitanía general en 1777. Pero esa concepción se vio rápidamente puesta en riesgo durante más de un siglo, a partir de las guerras que fracturaron a la monarquía hispánica a principios del siglo XIX y hasta la consolidación de la hegemonía andina en el temprano siglo XX. Esas guerras arruinaron las bases de una economía agropecuaria, interrumpieron el crecimiento natural de la población y generaron una considerable merma en la población.

Afortunadamente, el territorio de aquella antigua capitanía no terminó fracturado en varios países, como de hecho sucedió

con la Capitanía General de Guatemala. Venezuela logró sobrevivir como un territorio descoyuntado, extremadamente vulnerable a las apetencias de las potencias extranjeras, hasta que una sucesión de gobernantes andinos supo emplear el sobrevenido maná petrolero para sentar las bases de un verdadero Estado, capaz de ejercer el monopolio legítimo de la violencia a todo lo largo del territorio nacional. Y tal como suele suceder en las etapas primigenias de la conformación de un Estado, lo hizo autoritariamente, privilegiando el orden sobre la democracia.

Ese siglo petrolero venezolano, que por ende se inicia bajo la égida de un régimen autoritario, vivirá luego una explosión democrática que efectivamente será capaz de poner la renta petrolera al servicio de las grandes mayorías. Más allá de sus imperfecciones, la democracia venezolana de la segunda mitad del siglo XX sentó las condiciones para una movilidad social rara vez vista en la región y en el mundo entero. Empero, y tal como han explicado múltiples autores (Baloyra, Martz, Rey, Karl, etc.), la estabilidad de la democracia quedó supeditada a la efectividad del reparto de la renta. La lealtad al sistema era en sí misma bastante precaria, tal como quedó revelado durante los graves acontecimientos que tuvieron lugar durante la década transcurrida entre 1989 y 1999.

La llamada Revolución Bolivariana llegó al poder bajo la promesa de restablecer un imaginario consolidado durante la democracia, que la sociedad consideraba traicionado: el de un gobierno popular a favor de las grandes mayorías, donde dicha condición popular se vería reflejada en menos corrupción y transferencias más efectivas del Estado a la sociedad. El Estado

era, a fin de cuentas, asumido como motor de la economía y repartidor de la renta petrolera en un país lleno de riquezas. Durante los primeros años de la “revolución” ese imaginario pareció verse satisfecho: el hostigamiento a la disidencia fue visto como signo de combate a la corrupción, mientras el irresponsable despilfarro de recursos mediante una vasta red clientelar fue tomado por desarrollo.

Pero el tiempo no tardó en alcanzarnos. La destrucción del sector productivo nacional, tanto del público como el privado, es hoy más patente que nunca. La moneda ha sido pulverizada. Las instituciones ya no están al servicio de la democracia. Y por la más traumática de las vías, la sociedad ha ido perdiendo la esperanza de que el Estado sea el motor del desarrollo nacional. Tras 25 años de expolio continuado, el funcionariado público es hoy visto como una gigantesca maquinaria de extorsión, un entramado indescifrable y peligroso con el que el ciudadano común evita tener contacto en la medida de sus posibilidades. Del “Estado mágico” pasamos al “Estado matraca”.

Las dimensiones de este desengaño son inconmensurables. Echada nuevamente en brazos del hombre alzado en armas, Venezuela vuelve a conocer los rigores del engaño, el maltrato, el expolio y el abandono. De aquellos sueños de la “revolución bonita”, de aquel delirio de la “Venezuela potencia”, no quedan sino los sinsabores de una larga pesadilla, la angustia infinita que genera esa ficción totalitaria de la que el régimen chavista no ofrece escape alguno. De ahí que el venezolano vuelva a sentir con fuerza la más acuciante de las necesidades, la sed más profunda que se pueda experimentar, que no es otra que la sed de libertad que nace de un sólido amor propio.

Si contra todo pronóstico una religión minoritaria y perseguida como el cristianismo logró convertirse en credo oficial del Imperio Romano, no fue porque prometía tobos de agua ni bolsas de comida. Si la religión del perdón y la hermandad logró imponerse a las jerarquías de la ley y de las armas, fue precisamente porque supo ofrecer una esperanza a los más desesperanzados, porque le abrió la puerta de los bienes intangibles a quienes estaban más desprovistos de bienes tangibles, y porque inculcó en los más humildes el sentido profundo de su dignidad humana. El venezolano, como pueblo culturalmente católico que es, lleva en la sangre un sentimiento de dignidad personal que es la base de todo amor a la libertad. Un sentimiento al que es necesario apelar, mediante la palabra que dice la verdad, para sacudirse la pesadilla totalitaria.

Al mismo tiempo, en un terreno más pragmático y por esas paradojas de la vida, con la introducción del dólar en la economía nacional el sentido común se ha ido colando por la puerta de atrás. El venezolano que cobra en dólares por su trabajo, a diferencia del que cobra en bolívares, vuelve a experimentar la relación que verdaderamente existe entre esfuerzo y beneficio, al igual que lo hace el venezolano que trabaja fuera del país y envía remesas a Venezuela. Se recobra así un mínimo sentido de independencia personal, una cierta motivación al logro de la que casi naturalmente emerge la cabal comprensión de lo que realmente significa el mercado, entendido como ese *locus* donde demanda y oferta se encuentran para alcanzar acuerdos que nos benefician a todos.

De este modo, de la pulsión estatista, del frenesí expoliador, del paroxismo socialista, no parecería estar

emergiendo otra cosa que un renovado amor por la libertad personal, política y económica. Pocas consignas son más vitoreadas en las concentraciones que organiza María Corina por todo el país que la promesa de acabar con el socialismo, devenido en sinónimo de opresión y oprobio. Hasta los empleados de los sindicatos chavistas añoran las pólizas de HCM; hasta el más socialista de nuestros revolucionarios prefiere una clínica privada para su familia o evita para sus hijos las escuelas públicas. Y cuando paradójicamente la pulsión estatista ha terminado por destruir el Estado, el esfuerzo privado emerge como ineludible pilar de la recuperación nacional. Ya no es una cuestión de preferencias, sino de correspondencia con la verdad efectiva de las cosas.

De este modo toca a su fin el modelo del Estado sobredimensionado e ineficaz, surgido al calor del absoluto control público de la renta petrolera. Las indudables virtudes que durante un tiempo le caracterizaron terminaron siendo aplastadas por la exacerbación de sus peores tendencias implícitas. A día de hoy, incluso la posibilidad de revivir una suerte de Estado del bienestar pasa por una previa reconstrucción de las instituciones públicas, así como por la liberación de las fuerzas productivas de una sociedad férreamente atenazada por las dinámicas totalitarias imperantes actualmente.

Se impone la necesidad de un modelo de relaciones Estado-Sociedad enteramente distinto, en donde el espíritu de libre asociación y emprendimiento de los venezolanos, amparados por un efectivo estado de derecho, se erija como verdadero motor de la actividad económica nacional. La gran mayoría de

los venezolanos parece haber entendido esto desde el sentido común y la claridad que estimulan las grandes adversidades, a diferencia de lo que pregonan quienes aún tienen cómo negociar el ensanchamiento de sus jaulas dentro del caótico entramado actual.

d. La coyuntura 2024: ¿un punto de inflexión?

Las dictaduras de nuestro tiempo organizan votaciones; la realidad mundial no ofrece dudas al respecto. Lo que no permiten es que la gente elija. Para ello se valen de múltiples mecanismos a través de los cuales van impidiendo que se manifieste la voluntad ciudadana. Sin embargo, esto no quiere decir que las coyunturas electorales sean siempre un cómodo trámite para los regímenes autocráticos. Quizás sean situaciones relativamente fáciles de transitar para aquellos gobernantes autoritarios que cuentan con un notable respaldo popular, porque de hecho los hay. Pero no dejan de ser episodios incómodos para aquellos que cuentan con un masivo rechazo ciudadano.

No dedicaremos estas líneas a citar a decenas de autores que analizan el modo en el que los comicios, a pesar de todas las trabas que les imponen las autocracias, pueden desencadenar transiciones políticas. Sólo nos limitaremos a afirmar que esa posibilidad no se presenta de modo automático por el solo hecho de votar, sino que requiere la concurrencia de múltiples factores. Unas elecciones en las que sólo participan el autócrata y sus comparsas, desprovistas de cualquier voluntad de cambio y carentes de todo desafío al sistema, sólo contribuyen a estabilizarlo.

Las elecciones en autocracia sólo pueden eventualmente convertirse en un catalizador del cambio político cuando se asumen como una oportunidad para articular y expresar un rechazo masivo al régimen autocrático. Ello implica un enorme trabajo de comunicación, movilización y organización, en condiciones adversas y bajo múltiples riesgos. En este sentido, la unidad de las fuerzas que propugnan el cambio es fundamental, pero recalco: *las que propugnan el cambio*. Lo peor que puede suceder en estas circunstancias es que quienes procuran el cambio deban cargar en su movimiento con actores políticos que, en la práctica, le apuestan a la estabilidad del sistema autocrático.

Está claro que quienes controlan un sistema de estas características no están dispuestos a permitir su desmontaje si el cambio representa para ellos su persecución o encarcelamiento. Si se me permite el símil, esto funciona más o menos como un tubo de pasta dentífrica: la presión ejercida para que su contenido salga debe ir acompañada de la apertura de la tapa; de lo contrario, es difícil que el asunto pueda funcionar. Asimismo, debería ser evidente para todos que sin presión de ningún tipo las cosas tenderán a seguir tal como están. Por eso es necesario identificar el interés de los principales actores políticos involucrados, ya que no todos los que en teoría se oponen al sistema se perciben necesariamente como perdedores netos dentro del mismo. De hecho, aquellos que contemplan posibilidades de supervivencia y desarrollo dentro del ecosistema autocrático no tienen demasiados incentivos para asumir los costos inherentes a su modificación, sino que más bien propician voluntaria o involuntariamente su consolidación y fortalecimiento.

Los cambios de régimen político no suelen producirse cuando solamente existe una mínima unidad estratégica y operativa entre quienes genuinamente procuran el cambio, circunstancia que facilita la organización de los sectores sociales que también lo desean. También suelen ser necesarias la presencia de un liderazgo claro, la existencia de una crisis general del sistema y la pérdida de confianza de los grupos de poder que mantienen el sistema. En este sentido, para el caso venezolano actual, cabe señalar que el liderazgo de Machado contribuye significativamente, de cara a la ciudadanía, a centrar una línea de acción que un liderazgo colectivo no suele ser capaz de ofrecer.

Asimismo, el régimen chavista-madurista parece haber perdido a estas alturas toda posibilidad de ofrecer un modelo viable a los venezolanos. Tras desperdiciar el más grande *boom* petrolero de nuestra historia, el país está más arruinado que nunca. Ninguna de las iniciativas de política pública del régimen actual está orientada al desarrollo de la población, sino más bien a ejercer sobre ella un férreo control, y así lo percibe la gente. Por otro lado, la falta de resultados y el uso sistemático de la mentira han hecho que la dirigencia política del PSUV pierda toda credibilidad ante la población, de la cual viven separados por altos muros, gruesos blindajes y legiones de guardaespaldas.

No hay, en definitiva, encuesta alguna que no revele el gigantesco rechazo que genera este régimen político entre los venezolanos. Incluso varios de sus aliados internacionales, los que aún guardan algún respeto por las formas democráticas, han manifestado públicamente sus discrepancias ante los

manejos fraudulentos del proceso electoral. Las preferencias masivas por un cambio profundo y urgente saltan a la vista. Ciertamente nada de esto es garantía de cambio, pero hagamos por un momento el ejercicio inverso: si hoy se desplomara el régimen, tal como sucedió en su momento con la Unión Soviética, mañana pulularían los profetas del pasado, los que torear a toro pasado, explicando por qué esa caída estaba cantada y se la veía venir. Y no sin razón, porque, en efecto, los indicios de descomposición del sistema son ya, a estas alturas, más que notables.

Por último, tengamos presente que sólo en raras ocasiones el ocaso de las dictaduras discurre a través de cauces perfectamente previsibles e institucionales. Cuando eso sucede, por lo general se trata de autocracias que privilegian el orden, mientras que la continuidad del régimen chavista se basa en el desorden. Lo más habitual es que las autocracias caigan a través de una sucesión de errores y hechos inesperados que emergen cuando la presión externa e interna que experimentan sus dirigentes, aunada a la irrupción de mecanismos de salida, termina por hacerlos colapsar de modo un tanto sorprendente. En tal sentido, siempre y cuando se conjuguen los factores señalados en párrafos anteriores, las elecciones pueden ser un detonante del cambio incluso cuando se convierten en un robo flagrante. Tal fue el caso, por ejemplo de Venezuela en 1957-1958, de Panamá en 1989, de Perú en 2000, o de Bolivia en 2019. El tiempo, en todo caso, tendrá siempre la última palabra.

Un fantasma llamado Gramsci recorre México

Alejandro G. Motta Nicolichia

La “batalla cultural” de Antonio Gramsci se refiere a su concepto de hegemonía cultural, que es una parte fundamental de su teoría marxista. Gramsci, un filósofo y teórico político italiano, argumentaba que el poder en las sociedades no se ejerce solo a través de las instituciones del Estado o la fuerza económica, sino también a través de la cultura, la educación y los medios de comunicación. Según este referente de la izquierda latinoamericana, la hegemonía cultural ocurre cuando la clase dominante impone sus propias visiones, valores y creencias en la sociedad, estableciéndolas como la norma o el consenso común. Esto hace que sus ideas sean aceptadas ampliamente, incluso por aquellas clases que están en desventaja bajo este sistema¹. En resumen, la batalla cultural de Gramsci trata de cómo las clases dominantes mantienen el control social no solo a través de medios económicos y políticos, sino también a través del dominio cultural, y cómo las clases subalternas pueden desafiar y transformar este dominio para lograr el cambio social.

En este contexto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), líder del Movimiento de Regene-

1 Antonio Gramsci, *Pasado y presente* (Barcelona, España: Gedisa, 2018). Disponible en: <https://doi.org/eISBN:978-84-17341-13-8>

ración Nacional (MORENA), se adhiere a la lógica gramsciana de la “batalla cultural”. Esta es su base de acción política para que su partido permanezca en el poder y se consolide en el largo plazo su Cuarta Transformación.

Esta pretensión la está materializando a partir de tres vértices. El primero de ellos es la comunicación. Así como Hugo Chávez celebraba cada domingo su programa de televisión *Aló Presidente*, AMLO preside cada mañana, de lunes a viernes, una conferencia de prensa denominada *Las Mañaneras*. Durante dos horas diarias, el presidente configura la agenda pública, define la realidad, establece el tono de la conversación. Al principio de su gobierno, en el 2018, todo el periodismo tenía las puertas abiertas. Con el transcurrir de los meses y de los años –como podíamos suponer– la conferencia de prensa se tradujo en un espacio donde pseudo reporteros al servicio de su línea editorial, más que plantear preguntas de trascendencia y cuestionar su gobierno, exponen temas y variables de la realidad que terminan por convertirse en un preámbulo de la postura oficial. Así, *Las Mañaneras*, como lo fue el *Aló Presidente* de Chávez, resulta más bien un espacio pedagógico, no informativo.

El segundo vértice es el educativo. En el año 2019, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) distribuyó 6.000 ejemplares de libros de texto educativo en escuelas del estado de Michoacán. Según el medio de comunicación mexicano, *El Universal*: “En el libro *Sociedad de quinto de primaria*, la CNTE se refiere al neoliberalismo, dedica varios capítulos a las revoluciones Sandinista, en Nicaragua, y Cubana, a Fidel Castro y a Ernesto

Che Guevara, así como a las dictaduras militares de los años 70 en América Latina. Dos de los capítulos relacionados con el movimiento en Cuba son Antecedentes y Lucha armada en las páginas 145 y 146: “El 1 de enero, Fidel Castro entró triunfante a Santiago de Cuba, declarándola capital provisional [...] Estados Unidos reconoció al gobierno revolucionario. A partir de ese momento, el poder quedó definitivamente en manos de las fuerzas revolucionarias.”²

Lo ocurrido en Michoacán sentó un precedente. Así, el primer semestre de 2023 estuvo marcado por una batalla legal para permitir o no la distribución de nuevos libros de texto por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP); ciertamente no se trata de los mismos distribuidos en 2019 por la CNTE; aquello fue un experimento y lo ocurrido el año pasado fue real y contundente. En la gran mayoría de los estados la distribución del nuevo material educativo fue un hecho. Parte de su contenido repite y refuerza el discurso presidencial. Solo por citar uno, en el libro *Ética, Naturaleza y Sociedades de primer año de secundaria* se dice: “Una causa fundamental del origen de las desigualdades son los modelos socioeconómicos neoliberales implementados por décadas en la mayoría de las regiones del mundo, (que) otorgan facilidades, privilegios y estímulos a las élites políticas y económicas de los países... y que los bienes públicos puedan tener dueños privados que puedan apropiarse de ellos legal o ilegalmente, en el caso de

2 Redacción El Universal, "Fidel Castro, Marx y Comunismo en libros de la CNTE," *El Universal* (Ciudad De México), 2 de agosto de 2019. Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/fidel-castro-marx-y-comunismo-en-libros-de-la-cnte/>

México, los minerales del subsuelo, el agua, los bosques, las selvas y el viento»³. Luego de leer, quien dicta parece ser un seguidor de Karl Marx.

El tercer vértice es la reforma del Estado. Concretamente se quiere modificar o redactar una nueva Constitución a partir del siguiente año legislativo. Uno de sus grandes promotores es el líder del Partido de los Trabajadores (PT), amigo de Nicolás Maduro y acérrimo defensor de López Obrador, Gerardo Fernández Noroña. No es casualidad que este admirador de la Revolución Cubana sea el vocero oficial de la campaña de Claudia Sheinbaum. En el acto de proclamación de la elegida por AMLO, Fernández Noroña afirmó: «Yo estoy convencido (de) que deberíamos convocar a un poder constituyente, a una asamblea del pueblo donde hagamos una profunda reforma a la Constitución, o una nueva Constitución, y echemos atrás todas las reformas neoliberales». Así, no habría que extrañarse que de seguir MORENA en el poder, se ponga dicha iniciativa en el centro del debate.

Con este triángulo: comunicación, educación y reforma del Estado, no queda duda de que el fantasma de Gramsci recorre el estamento público del gobierno mexicano.

3 Raymundo Rivapalacios, "La Guerra Cultural De López Obrador", *El Financiero* (Ciudad De México), 7 de agosto de 2023. Disponible en: [https:// www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2023/08/07/la-guerra-cultural-de-lopez-obrador/](https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2023/08/07/la-guerra-cultural-de-lopez-obrador/).

¿Hay caldo de cultivo para que el fantasma gramsciano cobre mayor fuerza en México?

Desde la consultora Thinko Consulting hemos venido realizando estudios sociológicos para medir la opinión pública y, sobre todo, estudiar las creencias y la cultura de los mexicanos. Delimitando parte de nuestro análisis al evento electoral del próximo 2 de junio del presente año en tierras aztecas, podemos concluir que el 65% de los mexicanos desean un cambio de régimen en su país. Concretamente, se trata de un anhelo que demanda una transformación profunda de los partidos políticos tradicionales: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). Este es uno de los datos que explica la popularidad del presidente de la República.

Cabe aclarar: no es cierto que la inmensa mayoría de los mexicanos cree que AMLO es una esperanza para México. Sin embargo, es la cara más visible del cambio. No hay un sentimiento mesiánico hacia su figura pero es cierto que su imagen sigue representando lo nuevo por encima de lo viejo. El sentimiento de cambio profundo expresado en las urnas en 2018, sigue vigente en el humor social.

Al mismo tiempo una gran paradoja. El 60% de los mexicanos apoya al Presidente. Sin embargo, el 80% afirman que la seguridad, la economía familiar, la educación y la salud, han empeorado o siguen igual luego del gobierno de AMLO. ¿Por qué la paradoja o contradicción sociopolítica? Porque el rango de tolerancia sigue siendo muy alto. En los cualitativos que hemos realizado durante estos meses,

afirmaciones como: «Cinco años no son suficientes», «No podemos comparar cinco años de gestión con 80 años de los gobiernos anteriores», son claros y nos hablan de que AMLO sigue representando ese cambio.

Otro dato que nos hace concluir que el caldo de cultivo para un nuevo modelo político es una realidad, nos lo arroja el Latinobarómetro de 2023. El 56% de los mexicanos afirmaba: «No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas». El número refleja el fenómeno ciudadano que se denomina: desafección política. Este fenómeno es una consecuencia del “antiestablishment” y es algo que está instalado, palpable. Así, podría existir un intento para pulverizar las instituciones, para desaparecer el sistema de democracia liberal y para transformar los códigos dentro del sistema de derecho; y en ese espacio de peligro, la sociedad civil tendría la obligación de reaccionar. La pregunta que cabría hacerse es si los mexicanos son conscientes de lo azaroso que se convertiría el futuro si la Cuarta Transformación sigue profundizando la perversa tarea.

¿Qué pasa con la oposición?

Xóchitl Gálvez ha sido la elegida por los partidos políticos tradicionales que se oponen a MORENA para detener el rumbo que comenzó en 2018. Empresaria e ingeniera, conocida por su trabajo en el sector tecnológico y por su carrera en la política mexicana, destacándose como senadora y Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 2000, bajo la presidencia de Vicente Fox. En 2015, se postuló como candidata

independiente a la jefatura delegacional (alcaldía) en Miguel Hidalgo, Ciudad de México, ganando la elección y sirviendo hasta 2018. A partir de ese año fue elegida senadora, destacándose por su participación activa en diversas comisiones y por su enfoque en temas como tecnología, transparencia, rendición de cuentas y derechos de los pueblos indígenas.

¿Qué propone? Sus principales propuestas incluyen la creación de un Ministerio de Justicia perteneciente al Poder Ejecutivo Federal, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para fomentar una economía de clases medias, y un manejo económico responsable para controlar la inflación. También enfatiza la aceleración de la transición hacia energías renovables y la transformación de Pemex en Emex (Energías Mexicanas) para producir combustibles y electricidad limpia, algo que, por cierto, la presente administración nacional ha sido indolente y mezquina.

La campaña de Xóchitl Gálvez ha caído en una meseta en términos de intención de voto. Las encuestas más serias la sitúan por debajo de Sheinbaum con 12 o 13 puntos de desventaja. Faltando 50 días para la elección no representa una distancia imposible de alcanzar pero sí una cuesta dura de escalar. De entrada, Gálvez debe “cargar” con el peso enorme de los partidos políticos. Lo comentamos así porque el rechazo hacia las estructuras partidistas es de tal magnitud que cada foto o imagen que la asocie a los liderazgos nacionales de los partidos y a las propias marcas, representa una herida a su candidatura. Los indecisos, que hoy representan cerca del 10%, anhelan ver en Xóchitl una figura totalmente divorciada

de los partidos. Sin embargo, el reto es enorme y difícil considerando que son precisamente esos partidos quienes organizan y movilizan el trabajo de tierra, algo que en campaña resulta indispensable.

Gálvez ha decidido “ciudadanizar” más su campaña hablando más de ella y fijando posturas para empatizar con los problemas más delicados de la población; estos son, la inseguridad y sus variables (narcotráfico, fraude, robo o asalto, y extorsión), el alto costo de la vida, la pobreza y la falta de condiciones para un sistema de salud público óptimo.

¿Qué hacer?

Hay principios políticos que deben fortalecerse para crear conciencia, estimular la participación ciudadana y detener cualquier pretensión de una pseudo revolución que termine por destruir un país. Un principio inicial es la creación de identidad: si no sabemos qué somos, quiénes somos y qué representamos, será imposible persuadir a los demás de que nuestra identidad es la correcta. En ese proceso de construcción de identidad, resulta indispensable contrastar con el antivalor. Es tan importante definir lo que somos, como también definir lo que no somos y aquello a lo que nos oponemos. Debemos definir nuestras “causas y/o banderas”: en otras palabras, se trata de definir el “por qué y para qué” de nuestra identidad, de lo que representamos.

Igualmente, quienes defendemos a la democracia liberal, debemos ser sembradores y constructores de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero. Algo que es bello y verdadero será

siempre bueno. Algo que es bueno y verdadero, será siempre bello. Y algo que es bello y bueno, siempre será verdadero. Ante algo así, resulta irresistible no querer acercarse y luchar por ello.

Adicionalmente, debemos cultivar el conocimiento: el mayor enemigo de la verdad es la ignorancia. Se debe sembrar el interés por la formación cultural, formación de ideas, de valores sociales, de virtudes individuales. Sin pretender dar lecciones moralistas pero sí resulta indispensable sentar unas bases comunes para dirigir nuestras acciones hacia un punto en común.

Y dos cosas más para cerrar: la democracia liberal debe recrear su propio diccionario; con creatividad con nuevas formas. Esto es fundamental para combatir el “abecedario gramsciano” que ante el vacío formativo, convierte su propuesta en algo poderoso y atractivo. Por último, se debe poner a la familia en el centro del debate. ¿Por qué? Porque es la base de la sociedad y siempre será el reducto más sólido para protegernos de los antivalores que siguen recorriendo nuestra América Latina y donde México no es la excepción.

El Desafío de la Argentina de Milei

Miguel Gómez Goldin

Una motosierra, un peinado alocado, acusaciones hacia la clase política de conformar una casta, gritos desaforados y una maqueta del Banco Central siendo reventada. Las imágenes que han hecho conocido al presidente argentino sin trayectoria política han atravesado fronteras y no está en lo absoluto exento de polémica. Fueron pocos quienes pudieron pronosticar no solo una figura antisistema, de extrema derecha y outsider de la política sino también que prometiese ajuste y recesión ganando la presidencia de la nación frente a un candidato tan *mainstream* como su contrincante del tradicional peronismo en noviembre del 2023.

Su figura disruptiva logró penetrar en las preferencias del electorado de modo tal que hizo propio el malestar de los ciudadanos con los dirigentes tradicionales. El actual presidente desafió al sistema y al manual de la política. Inclusive la comunicación. Prometió depurar al Estado de una casta política que se hace de sus instituciones para servirse a ella misma; prometió ajuste y medidas de corte rigurosamente ortodoxo con el fin de equilibrar las cuentas fiscales, eliminar el déficit, reducir la inflación y propiciar las condiciones para generar un capitalismo competitivo y desregulado. Prometió sacrificio, sangre, sudor y lágrimas. Y así ganó.

¿Cuáles fueron los elementos y las circunstancias permitieron que la excéntrica personalidad de Javier Gerardo Milei llegase a ocupar el Sillón de Rivadavia? ¿En qué contexto este presidente propone un polémico paquete de reformas drásticas? ¿Y cómo ha llegado la Argentina, tras 40 años de democracia, a elegir un hombre que se presente como completo *outsider* del sistema político ajeno a sus vicios?

La República Argentina se ufana de su joven democracia. Pues resulta lógico: le costó nada menos que seis golpes de estado en el siglo xx llegar a un régimen político donde se respete el Estado de derecho, donde se celebren elecciones periódicamente y donde se garanticen los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. Más aún, ha sido ejemplo en el mundo por juzgar en tribunales civiles a los responsables de la última dictadura cívico militar que constituyó uno de los episodios más oscuros de su historia.

Sin embargo, detrás de esa joven y endeble democracia se esconde otra tragedia: su incapacidad de traer consigo prosperidad económica. Más bien, no logró garantizarla. En todas las décadas desde 1983 se han conocido años de profundas crisis y hoy un 41,7% de los argentinos¹ se encuentran debajo de la línea de pobreza, lo que representa unos 19,4 millones de personas. Por si fuera poco casi la mitad (47,6%) de los trabajadores se encuentran fuera del sistema en

1 José Gimenez, "Más de 19 millones de personas en la Argentina son pobres, una de las cifras más altas en 20 años", Chequeado.com, 27 de marzo de 2024, <https://chequeado.com/el-explicador/mas-de-19-millones-de-personas-en-la-argentina-son-pobres-una-de-los-cifras-mas-altas-en-20-anos/>

un esquema de informalidad que los priva de seguridad social, acceso a salud de calidad, vacaciones pagas, etc. Y si bien el desempleo ronda el 6,2% la inflación interanual ha alcanzado el 276,2%² quedando en el podio con países como el Líbano, Zimbabue y Venezuela.

En las elecciones del 2023, 30% del electorado tenía menos de 30 años, el 50,2% no llegaba a los 40 años y 6 de cada 10 electores tenía menos de 45 años de edad. En otras palabras era una elección definida por el sector milenial y centennial de la población. Téngase presente que numerosas organizaciones civiles y organismos internacionales tales como UNICEF no dejaban de resaltar que la pobreza y la informalidad afecta con mayor ímpetu a la juventud, por lo que no es de extrañar que el primer foco de ciudadanos seducidos por el terremoto violeta del libertario se concentre sobre todo en los segmentos más jóvenes.

De hecho, la Argentina se encontraba tan estancada que no lograba generar empleo genuino en el sector privado desde el año 2011. La inflación ha sido una derrota tanto de gobiernos peronistas como no peronistas en las últimas décadas y los habitantes de barrios populares –anteriormente denominados villas miserias– no han parado de ascender desde la crisis del 2001. Esto significa que lo dramático radica en el hecho de que, con 40 años de democracia, la política electoral y partidaria no

2 “Índice de Precios al Consumidor (IPC). Cobertura nacional. Febrero de 2024,” Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), febrero de 2024. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesde_prensa/ipc_03_24BF7A335103.pdf

ha sabido encontrar soluciones reales a problemas concretos que deriven en progreso y crecimiento.

La informalidad, que a veces vemos en los vendedores ambulantes, en los jóvenes conduciendo un *uber*, o en ciclistas de aplicaciones de delivery, alcanzan el 45% de los trabajadores. Representan ni más ni menos que 8 millones de personas que además de no estar registrados y encontrarse vulnerables frente a los vaivenes de una economía errática como la argentina padecen un profundo hastío de promesas vacías de un sistema político impotente que sólo logra verse a sí mismo. A ellos se les suman otros 3 millones que son trabajadores o profesionales por cuenta propia que tampoco gozan de la seguridad de los 5 millones que se encuentran asalariados en el sector privado. Ahora bien, lo más irónico fue la marca propia que generó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el periodo 2019-2023 que es la conformación de un escenario donde habitan asalariados en la formalidad, tanto dentro del sistema privado como del público, pero que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Es decir que generaron trabajadores debajo de la línea de pobreza que aun teniendo un empleo registrado son pobres. Dicho de otro modo, el sistema argentino se había tornado en una verdadera picadora de carne.

En esa línea, y a la luz de algunos números que ilustran una realidad frustrante, Milei triunfa casi como un acto de fe y de sentido común. Su voto se transforma en la apuesta por la opción distinta y fresca a la centro derecha y a la centro izquierda política que han gobernado los últimos 30 o 40 años, e incluso a la izquierda trotskista que ya forma parte de un

paisaje electoral que nunca tuvo chances reales. Todas experiencias frustradas. Ante una inflación que licúa los ingresos, donde se torna cada vez más dificultoso para los partidos canalizar personas excluidas del sistema y a trabajadores pobres ¿no resulta lógico, entonces, que un candidato antisistema, extremo y novedoso como Milei haya arrasado en las elecciones? ¿no es coherente que el peronismo tradicional, otrora identificado con sectores sindicales cada vez más alejados de su base, pierda representatividad?

Como resultado del panorama anteriormente descrito, Milei arribó a la Casa Rosada de una forma inusitada y sin precedentes. Anteriormente, se creía que el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) había sido el más minoritario de la historia porque se trataba de un presidente cuya fuerza detentaba apenas 5 gobernaciones de 24 (4 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que oficia de híbrido entre gobierno subnacional provincial y ciudad-municipio). Milei, en cambio, alcanzó el poder sin ganar ni gobernar ni una sola de las provincias ni contar con un solo gobernador aliado. De igual forma, de más de 1000 municipios y comunas, solamente obtuvo 3 intendencias. Por consiguiente, llega al Poder Ejecutivo Nacional un mandatario sin ningún tipo de base o poder territorial como jamás lo careció un presidente.

De hecho, en muchas provincias Javier Milei ganó con “boleta corta”. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de estas a la hora de aproximarse al cuarto oscuro para emitir el voto se podían encontrar numerosas boletas para distintas categorías como Presidente, Gobernador, Senador, Diputado,

Intendente, Concejal, etc., pero en gran parte de las provincias Milei se limitaba a presentarse con una boleta que circunscribía la postulación de la Libertad Avanza, su fuerza política, a la categoría presidencial reflejando así la falta de aparato y de interés por la misma. Pero también le permitía plebiscitar su figura contra todo. Elegían al economista, al loco, al panelista, al nuevo, al disruptivo y no a un partido, una alianza o una fuerza. Es más, siendo un candidato porteño (oriundo de Buenos Aires) arrasó principalmente en el interior (las provincias más periféricas). Conoció el triunfo en la elección más difícil a pesar de carecer de una maquinaria electoral que sustente su candidatura en un país tan extenso, diverso y rígido.

De más está decir que un esquema federal de gobierno, las figuras de los gobernadores se presentan como las figuras críticas para garantizar gobernabilidad toda vez que ejercen un poder territorial con capacidad de obstaculizar las medidas e intenciones del presidente. Sin estos, difícilmente se puede garantizar el éxito de un proyecto político y en parte fue lo que sucedió con la experiencia del gobierno de Cambiemos/Juntos por el Cambio comandado por Macri.

En el ámbito parlamentario, por su parte, la situación tampoco es muy diferente. Tan solo en el Senado, el oficialismo detenta 7 bancas sobre 72 sin contar con la presidencia que ejerce Victoria Villaroel, la Vicepresidenta de la Nación. Su voto solo cuenta en caso de empate. La oposición dura representada en el kirchnerismo y distintas expresiones del peronismo alcanza las 33 bancas. El resto le corresponde a distintos partidos como radicales, el pro y diversas fuerzas

provinciales que pueden o no constituir aliados circunstanciales.

En la Cámara de Diputados, por su parte, la fuerza del presidente posee una bancada que apenas supera la cuarentena de diputados de un total de 257 legisladores. Estamos frente a un gobierno que sin importar lo que se desee proponer en estos cuatro años va a precisar perentoriamente entablar diálogo y negociación con otras fuerzas para superar los obstáculos del Congreso que supone un sistema republicano –y la democracia misma- en caso de querer garantizar el éxito de su provocadora agenda reformista y libertaria. El peronismo y la izquierda dura aglutinan allí 105 opositores que van a rechazar a toda iniciativa del oficialismo. En el medio van a encontrar otra cuarentena de posibles y eventuales aliados identificados en el PRO (partido propuesta republicana) y expresiones cercanas, en conjunto a otros bloques como el histórico radicalismo (con una treintena de diputados) y otras fuerzas como Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal donde se nuclean distintos partidos nacionales y provinciales que si bien son más reticentes a brindar apoyo explícito –mucho menos incondicional- al gobierno si se presentan como posibles garantes de gobernabilidad.

El desafío, consecuentemente, para el economista reside en lograr sortear los derroteros de la política tradicional a los que tanto se opone para instalar una batería de medidas que encuentra resistencias en casi todo el arco político. Le pasó con un controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (el 70/2023) y con sus medidas contextualizadas en su batalla

cultural. Es más paradójico aun cuando se reflexiona al respecto debido al hecho de que el gobierno hace precisamente gala de su rechazo explícito a las reglas y convencionalismos de la política donde las herramientas predilectas y principales son el diálogo y la negociación. Pero más notable resulta aún que en ese esquema de fracaso garantizado por falta de músculo político logra hacer de las derrotas una victoria retórica ya que todo impedimento a una reforma laboral, impositiva, fiscal o política se explica en que la “casta” no resigna sus privilegios.

Durante las negociaciones sobre la denominada “*Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos*”³ un monstruoso y osado proyecto de ley que superaba los 600 artículos que abarcaban todas las temáticas, se experimentó esta situación. Según la lógica y las prácticas habituales, se esperaría que el gobierno hiper minoritario buscara seducir y persuadir a otros bloques para obtener mayorías circunstanciales *ad hoc* que le permitieran aprobar su agenda legislativa. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Mientras que algunos funcionarios del Ministerio del Interior encargado de las vinculaciones políticas, junto con Santiago Caputo, el asesor estratega estrella, intentaron desempeñar ese papel, los congresistas no recibieron otra cosa que insultos y críticas tanto en las redes sociales como en la televisión por parte del presidente y su círculo cercano. En otros términos, su situación de debilidad no derivó en un oficialismo buscando

3 Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Disponible en: <https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2023/PDF2023/TP2023/0025-PE-2023.pdf>

asistencia sino escalando el conflicto y denostando a otros actores de los que precisaba. El presidente logra así interpelar a todos los políticos y analistas a pensar fuera de la caja acerca de cómo se concibe a la política.

¿Cómo es posible que con apenas 3 intendentes, menos de 50 parlamentarios y ni un solo gobernador, el presidente no titubee en redoblar todas y cada una de las apuestas tanto en materia retórica como económica y política? Su debilidad no lo hace recular sino intensificar la disputa. Originalmente se debería considerar que un ajuste fiscal de corte ortodoxo para sanear las cuentas públicas sería imposible de llevar adelante sin un contingente legislativo de donde hacer pivot ni un conjunto de gobernadores que brinden apoyo a la Casa Rosada pero en La Libertad Avanza se enfrentan a todos los gobernadores sin temor alguno a que la confrontación funcione como esquema de incentivos a unificarlos contra el oficialismo. Pensando precisamente fuera de la caja termina por alimentar su retórica anti casta y triunfando aún en la derrota.

En dicha retórica y el foco que hace el presidente se nos permite observar que se trata de un caso muy diferente al de otros presidentes populistas de derecha como Trump, Bukele o Bolsonaro. Si bien estos representaron profundos terremotos en sus respectivos países hay matices sustanciales que distinguen el caso rioplatense.

En primer lugar, mientras Bolsonaro había sido parte de la escena política del Brasil por décadas en la cámara baja, Milei incurrió por primera vez en política en las elecciones legislativas del 2021. Anteriormente solo era conocido por su

desfile en diversos programas de televisión como panelista. Tampoco cuenta con un sector sustantivo de base tales como la iglesia evangelista o los militares quienes le proporcionaron un apoyo y una base estratégica al dirigente carioca.

En segundo lugar, y en ese mismo sentido, a diferencia de Trump que supo asaltar una poderosa estructura política como la del Partido Republicano estadounidense y sobre ella construir su candidatura, el argentino apenas se limitó a buscar pequeños partidos –casi insignificantes en términos electorales– por su mera utilización en tanto vehículos legales para cumplimentar los requisitos mínimos e indispensables que la justicia demandaba para poder presentarse en elecciones. Ello le permitió evitar recurrir a las negociaciones y concesiones con líderes de partidos convencionales que tanto desagrado le producían.

Y en tercer lugar, muy distinto es el caso de Nayib Bukele que persigue, además de un programa, explícitamente la reelección y su mantenimiento en el poder. En múltiples ocasiones, Javier Milei ha explicitado que no pretende tener más de un mandato y tampoco muestra señales ni acciones de un político cuyo interés principal radique en el poder. Un *rara avis* en un Presidente.

La prioridad absoluta suya se centra y circunscribe en su mandato político de reducir la inflación, dejando de lado todo lo demás. Para él, si eso significa adoptar una serie de medidas drásticas e impopulares con un elevado costo social que así sea. A diferencia de la clase política convencional, cuyo enfoque principal es la construcción y el mantenimiento del poder en sí

mismo, el enfoque del libertario se limita únicamente al equilibrio fiscal y la estabilidad económica. Esta perspectiva le otorga un horizonte temporal distinto al de sus oponentes, lo que le permite tomar decisiones altamente antipáticas que sus predecesores evitaban debido al costo político que conlleva, tanto en las próximas elecciones como en la consolidación de su poder. Curiosamente, al adoptar medidas extremadamente ortodoxas, el presidente se encuentra en una posición donde puede fortalecer aún más su posición política si en efecto logra reducir la inflación.

Un ejemplo evidente se encuentra también en la *Ley de Bases*, también conocida como la *Ley Ómnibus* donde se concentraba el quid de sus reformas. El gobierno de La Libertad Avanza es esencialmente una coalición de partidos secundarios. Incluye al Partido Demócrata, la UCeDé, UNIR y al Partido Liberal, entre otros, que anteriormente eran poco más que instrumentos legales para participar en elecciones sin una verdadera posibilidad de llegar al gobierno. Por eso, en la jerga, al no tratarse de partidos grandes y tradicionales, se los denominaban “sellos de boma”. A pesar de ello, lograron obtener el 30% de los votos en las elecciones generales, con un triunfo significativo en las áreas rurales del país y más alejadas de Buenos Aires. Luego, en la segunda vuelta arrasaron con un 56% de los votos. A pesar de esto, promovieron en lo que la mencionada Ley una reforma política que apunta hacia un sistema uninominal, lo que debilita a los partidos más pequeños y concentra la representación política en el conurbano, el área metropolitana de Buenos Aires, un bastión del peronismo. El proyecto quedó trunco pero un presidente

que persigue mantenerse en el poder no impulsaría jamás tal reforma. No obstante, este sí lo hace. Su incentivo es otro y su obsesión es la economía, no las elecciones. Por ello, es capaz de realizar sacrificios en materia económica (frenar los pagos a comedores, licuar gasto social como el de los sueldos estatales y jubilaciones o detener la obra pública) que ningún otro se hubiese atrevido.

“(…)Todo va bien mientras estemos a gusto, trabajamos seguros, con una bonita familia, una casa de campo, vacaciones a la orilla del mar, una buena jubilación a la vista. Somos prudentes a la hora de elegir, no queremos correr riesgos. Elegimos lo que conocemos. Pero supongamos que las cosas empiezan a torcerse. La situación cambia, el tipo pierde su trabajo, pierde su casa, no ve claro su futuro. ¿Qué hace en ese momento? ¿Opta por la prudencia? En absoluto: ¡empieza a apostar como un loco! Prefiere el riesgo desconocido antes que mantener su situación actual. Es entonces cuando todo da un vuelco: el caos se vuelve más atractivo que el orden, al menos ofrece la posibilidad de algo nuevo (...) Un giro inesperado...(...)”⁴. Ello explica Giuliano da Empoli acerca de cómo a veces las sociedades finalmente terminan optando electoralmente por un distinto, por algo intrépido y temerario que puede significar un salto al vacío hacia la perdición pero también una solución.

La viabilidad de su éxito reside pura y exclusivamente en la efectividad de reducir la inflación, en la tolerancia de los argentinos con el modus operandi del libertario y el músculo

4 Giuliano da Empoli, *El Mago del Kremlin* (Madrid: Seix Barral, 2023).

político que adquiera en los próximos meses. Ahí sí se verá si se prefiere la prudencia con lo conocido o la motosierra, el peinado alocado y los gritos desaforados.

Seguridad y estabilidad: la oportunidad de la política para salir del pantano

Andrea Balladares Letelier

El año 2024, desde sus comienzos, se ha visualizado complejo para América Latina, con importantes cambios en conducción política y en lo económico. La CEPAL¹, anunció que el año 2023 terminó con un crecimiento del 2,2% y proyecta una caída al 1,9% para el año en curso, retrocediendo 10 años en el nivel de PIB per cápita, disminuyendo así el bienestar de la población latina y lo que, además, trae consigo una insuficiencia para reducir las aún altas tasas de pobreza y de informalidad que aquejan a la región. Los pronósticos más pesimistas anticipan desaceleración, desinflación, deuda y desglobalización.

En lo político, para América Latina este año tendrá mucho movimiento electoral, con seis elecciones presidenciales: El Salvador, México, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Venezuela, y elecciones territoriales como en Chile. Adicionalmente, los ojos estarán puestos en Brasil y Argentina. En Brasil, veremos si Lula podrá seguir sosteniendo los niveles de aproba-

1 Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL, 2023.

ción, con una oposición fuerte y si continuará siendo el líder regional. Para Argentina, la atención estará puesta sobre Milei, su política drástica y dura, y su falta de mayorías parlamentarias.

En el transcurso de estas elecciones, los gobiernos latinoamericanos seguirán enfrentando amenazas que están dañando el estado de derecho, la democracia y la gobernabilidad. Estas amenazas contemplan el crimen organizado, la corrupción sistémica y el populismo autoritario. Por lo mismo, es muy probable que haya un voto de castigo a las coaliciones gobernantes, la ocurrencia de balotajes sin mayorías claras, gobiernos divididos e inestables y candidatos populistas.

Desde el análisis político-electoral, el CEIUC2 plantea que es necesario tener presente los principales riesgos políticos para este año de la región. El ranking es liderado por la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. Sin embargo, el segundo lugar es ocupado por el aumento de la corrupción e impunidad, un problema que se arrastra hace años y muestra un aumento preocupante. La concentración del poder y connivencia de élites políticas y económicas aumenta la opacidad de las burocracias estatales, al tiempo que la informalidad y la cultura de la ilegalidad contribuyen a la imbricación de la corrupción en la sociedad civil. La desafección democrática vuelve a ocupar lugares avanzados, figurando en el tercer lugar, esto por una profunda crisis de representación está afectando la confianza en los partidos políticos tradicionales y trasladando las expectativas hacia nuevos liderazgos con escasa estructura y experiencia de gestión que les impiden al llegar al poder contar con

bases sólidas de gobernabilidad. La gobernabilidad bajo presión y rápida pérdida de apoyo de los mandatarios se ubica en el cuarto lugar, seguido por el aumento de flujos migratorios, un tema de enorme complejidad y sin una salida clara en la región. En el segundo tramo del índice se ubican la radicalización de las protestas sociales (6to lugar), la inestabilidad internacional (7mo lugar), el deterioro del clima de negocios (8vo lugar) el impacto de la tecnología en la política (9no lugar) y, por último, la vulnerabilidad frente al cambio climático (10mo lugar).

Es por todo lo anterior que, favorablemente, la dominancia de gobiernos de izquierda en América Latina desde inicios de 2023 se ha visto reducida por triunfos de gobiernos de derecha en Paraguay, Ecuador y Argentina, y algo similar podría ocurrir para el presente año. De ser así, la distribución político regional sería menos homogénea y sin fuerzas mayoritarias que predominen.

Chile, durante las elecciones territoriales de este año, deberá seguir enfrentando las tres crisis latentes que se extienden por toda la región: (1) la crisis de gobernabilidad, con instituciones cuestionadas donde es palpable que los niveles de confianza hacia las entidades públicas siguen bajos, el descontento respecto de la calidad de los servicios públicos sigue continuamente en alza y las redes sociales siguen aumentando una velocidad a las demandas sociales que el Estado no es capaz de hacerse cargo de manera eficiente; (2) una crisis de expectativas, con confianzas dañadas con la ciudadanía. Los gobiernos no han podido adaptarse al cambio social. Mientras la ciudadanía opera bajo una lógica contemporánea, con la digitalización como acelerador, el Estado y sus

instituciones siguen operando bajo ritmos de antaño; y (3) la crisis de certezas, dados los niveles de incertidumbre económicos y políticos.

Libertad y Desarrollo, en su Informe de Coyuntura Política 2024, plantea que para este año electoral es pertinente evaluar el impacto que tuvo en el escenario político actual, el proceso constituyente de 2023. En primer lugar, se hace presente que, tras cuatro años, la agenda constitucional se ha extinguido, a lo menos, hasta el fin de esta administración. Lo anterior, es una noticia positiva para el país y una buena oportunidad para la clase política, ya que abre una ventana de oportunidad para reconectar con las reales prioridades ciudadanas. A nivel político, el plebiscito constitucional no provocó un impacto ciudadano de amplio alcance. Los niveles de aprobación presidencial continúan estables en torno al 30%, no habiendo capitalización de esto, ni para el Gobierno ni para el Presidente. Por otro lado, tal como mencioné anteriormente, la crisis de seguridad sigue siendo el tópico de discusión política más abordada y justamente se suma a una cada vez más relevante temática de la corrupción, la que ha alejado más aún de la política a la ciudadanía tras el Caso Convenios, Caso Hermosilla y otros escándalos. Esto ha sido totalmente complejo de enfrentar y abordar para el gobierno y la coalición oficialista, más aún siendo ellos los portadores desde hace 10 años de las banderas de la transparencia y probidad como aspectos distintivos de su acción política.

Las condiciones tras el año constitucional pasado requieren el máximo esfuerzo en cuanto a unidad de todas las fuerzas de centro y de derecha. Esto es coincidente con el informe de

LyD3, en primer lugar, porque el oficialismo intentará atacar puntos débiles de la oposición, es decir, esos flancos donde no existe una mirada unitaria opositora, lo que representa oportunidades para hacer avanzar en sus reformas. El caso de la Reforma de Pensiones es un reflejo de lo anterior, en términos de que el oficialismo ha sido capaz de sumar a las fuerzas “no alineadas” de la oposición como el PDG y Demócratas, para así, habiendo logrado aprobar en la Cámara de Diputados su propuesta previsional de dividir el incremento del 6% de cotización en un 3% para cuentas individuales y el otro 3% para un fondo de reparto. El Senado, será una segunda prueba de fuego para el centro y la derecha, pues, se verá la capacidad de cohesión, disciplina y convicción del amplio espectro opositor por defender definiciones con amplios niveles de respaldo ciudadano, como es el hecho de que el 100% del aumento de la cotización tenga como destino las cuentas previsionales individuales de los afiliados.

Otro tema que exigirá unidad y complicidad en nuestro sector, se relaciona a la necesidad de establecer una política de alianzas entre las fuerzas opositoras. Solo a través de esta, la oposición podrá enfrentar el desafío de arribar a una unidad efectiva para el ciclo electoral municipal y regional, cuyas elecciones se celebrarán en octubre de este año. Pese a todos los problemas que ha experimentado el Gobierno, el sólido 30% de respaldo al Presidente Boric, sumado a liderazgos presidenciales de izquierda, registran un alza en niveles de valoración, sumado al hecho de que las fuerzas de Gobierno ya consolidaron una alianza electoral amplia desde la DC al PC, perfectamente podrían hacer del oficialismo una fuerza

electoral competitiva tanto en el ámbito municipal, regional, pero también parlamentario y presidencial. Asimismo, cada vez parece ser más claro el impulso de un Partido Socialista que sigue ganando espaldas en la interna del oficialismo por desarrollar una estrecha complicidad con el Frente Amplio. Si bien es cierto que en Latinoamérica, se ha desarrollado con fuerza una irrupción “oposicionista” en el cual, 8 de cada 10 elecciones están siendo ganadas por fuerzas contrarias al Gobierno de turno, este número, no es garantía de éxito alguna, en sí mismo, que se pueda repetir en Chile, si no se fortalece la unidad de la oposición doméstica. Es por esto, que debemos potenciar liderazgos más duros e incidentes, organización de opinión y sobre todo disciplina.

Hay que prestar atención en figuras históricas de la política contemporánea. La irrupción de estos personajes en la campaña constitucional de 2023, pueden haber tenido un respiro, siendo la más importante de ellas la vuelta a lo público de la ex presidenta Michelle Bachelet como potencial candidata presidencial del oficialismo para las presidenciales del año 2025. Su desempeño en la campaña constitucional, sumado al apoyo público que ha brindado al gobierno y a su propia imagen positiva (que alcanza un 57% según la encuesta Cadem de la 3ra semana de marzo), la han posicionado nuevamente con un piso aparentemente sólido para pensar en volver a competir. En esta misma línea, en la última encuesta Pulso Ciudadano, con salida de campos en marzo, la ex presidenta alcanzó un 8,1% de las preferencias presidenciales (un crecimiento de 3 pp respecto a enero), ubicándose en tercer lugar tras la alcaldesa Evelyn Matthei (24,9%) y José Antonio

Kast (11,7%) y por sobre otras cartas del sector como la ministra Camila Vallejo (4,5%).

El ICP, coincide que con estos casi dos años de gestión de Gabriel Boric, quedó claro que aproximadamente un tercio de la población respalda al Gobierno. Aunque sea cierto que solo un 30% de aprobación a la gestión, no es una buena noticia para ningún gobierno, cabe recordar que estos poseen ciclos expresados en las cifras de aprobación ciudadana. En este sentido, al observar las tendencias respecto a esto último, los gobiernos comienzan con una buena aprobación, para luego disminuir según avancen los meses, alcanzando los peores resultados durante el segundo y tercer año de mandato y, finalmente, recuperarse paulatinamente durante el cuarto año. Teniendo en consideración estos antecedentes, es que el tercio de apoyo que hoy obtiene el presidente Boric deja de ser un pasivo y se transforma en un potencial activo⁴. Así, haciendo comparaciones con los anteriores dos gobiernos, observamos, en primer lugar, que hoy el presidente Boric cuenta con un mayor índice apoyo que el que registraban los expresidentes Bachelet y Piñera al mismo momento de sus respectivos últimos mandatarios. En segundo lugar, los niveles de aprobación de los expresidentes Bachelet y Piñera fueron sustancialmente mayores al momento de realizarse la elección presidencial que eligió a sus sucesores.

En esta línea, se podría afirmar que está dentro de las posibilidades de que el actual Gobierno alcance niveles de aprobación superiores hacia fines del próximo año. Esto significa que la coalición de gobierno tiene posibilidades de enfrentar la próxima elección presidencial de forma compe-

titiva, sobre todo si es que su carta es una figura como Michelle Bachelet que mantiene un amplio respaldo ciudadano y que logra aunar a distintas facciones de la izquierda, desde los partidos de la ex Concertación al FA y PC. Ante este escenario y a pesar de las tendencias internacionales que comenté anteriormente, en donde las fuerzas de oposición han ganado la mayoría de las elecciones que disputan, ningún sector político puede pensar que las próximas elecciones presidenciales están definidas. Ante esto, el llamado para este año es unidad, inteligencia electoral y, por sobre todo, demostrar garantías de estabilidad.

Más aún, para la derecha chilena, la peor elección municipal desde el 2000 en adelante fue la última del año 2021. Se obtuvieron 87 alcaldías, habiendo tenido en los mejores momentos 145 alcaldes, cifra que para este año es desde de las municipalidades que se deben recuperar.

Muy probablemente, en estos comicios, la balanza de autoridades electas esté equilibrada para ambos sectores, lo cual es favorable para la actual oposición, pues los principales temores de los electores, siguen siendo la seguridad, crimen organizado y narcotráfico, lo cual es una ventaja para la derecha si logra dar confianzas y seguridades de combatir esto con medidas de urgencia e inmediatez. Sin embargo, las alianzas que se hagan entre los seis partidos que no son oficialistas: los dos del centro, los tres de Chile Vamos y el Partido Republicano, también es fundamental, en virtud de que puedan dar muestras de gobernabilidad y certezas de estabilidad a los votantes.

Autores

Ruth López

Ruth López es salvadoreña, abogada y notaria. Graduada de la Universidad de La Habana de Licenciatura en Derecho. Investigadora y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador de la materia de Derecho Electoral y Derecho Mercantil. Dentro de sus acreditaciones académicas destaca una Maestría en Derecho Electoral por parte de la Universidad de Valencia-Universidad Castilla La Mancha, Especializaciones en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de México y una Maestría en Derecho Societario en la Universidad de Barcelona, entre otros estudios de formación continua.

Se desempeñó como Directora del Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia y fue asesora de la presidencia del TSE y de la Dirección General de ISSS. Actualmente funge como Jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia en Cristosal.

Miguel Angel Martínez Meucci

Doctor en Conflicto Político y Procesos de Pacificación (Universidad Complutense de Madrid). Licenciado (UCV) y Magister (USB) en Ciencias Políticas. Ha sido profesor en las universidades Simón Bolívar (USB), Metropolitana (Unimet) y Católica Andrés Bello (UCAB) en Venezuela; en la Austral de Chile y en la Francisco Marroquín (Guatemala). Coordinador de Maestría y Doctorado en Ciencia Política (USB: 2012-2015). Colaborador de las fundaciones alemanas FES y KAS. Columnista en medios venezolanos y extranjeros. Consultor político. Miembro del Comité Académico de Cedice.

Alejandro G. Motta Nicolichia

Preside la consultora en comunicación política y opinión pública Thinko Consulting. Es Doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Además, es Magíster en Political Management por la George Washington University. Imparte clases de posgrado en diversas universidades de América Latina y España. Es analista político y especialista en opinión pública y comunicación política. Ha sido consultor de opinión pública en países como Venezuela, Bolivia y Chile. Es columnista para el medio español *La Razón* y para el medio Aceprensa, Venezuela.

Miguel Gómez Goldin

Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, cuenta con un posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política de FLACSO, es Magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral y Magíster en Asuntos Públicos de la Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Actualmente se desempeña como consultor y como Jefe de Despacho en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, habiendo sido asesor de varios parlamentarios. Anteriormente, fue Gerente Operativo en la Secretaría General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Previamente, fue interno en la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Ginebra y en Junior Achievement en París.

En el ámbito académico es docente titular de Historia de las Políticas Públicas en Argentina a nivel posgrado en la Universidad Austral, y docente a nivel grado en las cátedras de Políticas Públicas, Historia de los Partidos Políticos Argentinos, como adjunto, y del Seminario "Conocimiento Parlamentario y Técnica Legislativa" como titular en la USAL.

Fue Becario Eiffel, Fulbright, FURP y del INSP (ex École National d'Administration) de Francia.

Andrea Valladares

Secretaria General de Renovación Nacional. Licenciada en Sociología. Ex Subsecretaria de Servicios Sociales del ministerio de Desarrollo Social, además se desempeñó como delegada Presidencial en las regiones de Araucanía y Coquimbo, por el COVID-19. Durante 2 años fue jefe de División de Gobierno Interior, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Entre los años 2014 y 2017, trabajó como jefe de Gabinete del senador Alberto Espina.

Índice

El Salvador 2024: la consolidación del régimen autocrático <i>Ruth López</i>	2
Elecciones 2024: ¿un posible punto de inflexión? <i>Miguel Ángel Martínez Meucci</i>	18
Un fantasma llamado Gramsci recorre México <i>Alejandro G. Motta Nicolichia</i>	41
El Desafío de la Argentina de Milei <i>Miguel Gómez Goldin</i>	50
Seguridad y estabilidad: la oportunidad de la política para salir del pantano <i>Andrea Balladares Letelier</i>	63
Autores	71